



B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

1

RESOLUCIÓN N° 664

Buenos Aires, 10 SEP 2013

VISTO:

El presente Sumario en lo Financiero N° 1235, que tramita en el Expediente N° 100.398/07, dispuesto por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 375 del 14.05.08 (fs. 257/58), en los términos del artículo 41 de la Ley 21526 -con las modificaciones de las Leyes 24144, 24485, 24627 y 25780, en lo que fuere pertinente-, a efectos de determinar la responsabilidad del ex **BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO** y de diversas personas físicas por su actuación en dicha entidad, en el cual obran:

I - El Informe N° 381/052 del 11.01.08 (fs. 249/56), como así también los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones a fs. 1/248, que dieron sustento a la irregularidad imputada, consistente en:

- Inadecuada política de liquidez verificada en la falta de instrumentación de procedimientos para gestionar oportunamente el recupero de la cartera morosa, en transgresión a la Comunicación "A" 2879, LISOL 1-230. Anexo. Sección 1. Punto 1.1.

II - Los involucrados en el sumario, son el ex BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOP. LTDO. y los señores Carlos Héctor MERLO, Elio Enzo GIACOSA, Luis Atilio RODRÍGUEZ, César Manuel RENGEL, Germán Adolfo ANDREOZZI, Ernesto Hugo MASINO, Mariano Vicente GHIDARA, José Luis PRESTI, Carlos José FALIVENE, Raúl Osvaldo SAADE, Gaetano TRALICE, Humberto SANCHEZ, José Antonio GONZALEZ, Víctor Hugo BONO, José Antonio IGARZA y Carlos Miguel Angel CENA, cuyos datos personales y períodos de actuación obran a fs. 55/56, fs. 207, fs. 208/16, fs. 220/22, fs. 224, fs. 234/40 y fs. 243/44.

III - Las notificaciones efectuadas, vistas conferidas y descargos presentados fueron detallados en el Informe 381/1334/08 (fs. 343/48).

IV - El auto interlocutorio del 29.10.08 (fs. 353), el de apertura a prueba del 11.06.09 y sus pertinentes notificaciones (fs. 376/87); la documentación incorporada durante el período probatorio (fs. 388/431, fs. 445 y fs. 618/29); el cierre del período probatorio de fecha 18.05.10 (fs. 432/33) y sus respectivas notificaciones (fs. 434/41), los alegatos obrantes a fs. 444, subfs. 1/2, fs. 446, subfs. 1/21, fs. 450, subfs. 1/5, fs. 451, subfs. 1/3, fs. 452, subfs. 1/28, fs. 453, subfs. 1/28, fs. 454, subfs. 1/29, fs. 455, subfs. 1/28, fs. 456, subfs. 1/28, fs. 457, subfs. 1/28, fs. 458, subfs. 1/28, fs. 459, subfs. 1/28, fs. 460, subfs. 1/28, fs. 461, subfs. 1/27, fs. 462, subfs. 1/27 y fs. 466/71, como también las presentaciones de fs. 463, subfs. 1/8, fs. 464, subfs. 1/3, fs. 465, subfs. 1/2, fs. 472/88, fs. 568/98, fs. 599/614, fs. 630/722 y fs. 723/25, y

CONSIDERANDO: I - Que previo a la determinación de responsabilidades, corresponde analizar la imputación de autos, los elementos probatorios que la avalan y la ubicación temporal de los hechos que la motivan.

1 - Que durante el desarrollo de las tareas de supervisión realizada en la entidad financiera sumariada con fecha de estudio al 30.06.03, se observó que la ex entidad contaba con una cartera crediticia altamente morosa; en ese sentido se constató que las asistencias en situación 3, o con una calificación inferior, representaban el 75% de las financiaciones otorgadas por la ex entidad

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	2
<p>financiera al sector privado no financiero. Ello motivó que tanto quienes realizaban tareas de veeduría cuanto de supervisión, le efectuaron una serie de indicaciones por medio de notas dirigidas al Consejo de Administración, que fueron respondidas en sucesivas presentaciones, no obstante lo cual el ex banco no dió cumplimiento satisfactorio de las referidas indicaciones (fs. 249/50).</p> <p>Así refiere el informe acusatorio que mediante Nota N° 316/28 del 26.02.04 (fs. 5/6) se le indicó que atento el elevado nivel de mora de la cartera crediticia, resultaba necesaria la definición, con premura, de una estrategia para afrontar dicha situación que contemplara la reorganización de los sectores correspondientes y/o la incorporación de abogados, poniendo especial atención en la ejecución de la totalidad de los clientes que ameritaran el inicio de acciones judiciales y en no generar honorarios a cargo del ex banco en casos de insolvencia de los mismos (fs. 250).</p> <p>Asimismo se requirió el nombramiento de una persona responsable del seguimiento y control de las medidas que se tomaran con relación a la gestión judicial y, por otra parte, que se informara al BCRA, por mesa de entradas, los lineamientos acordados, los clientes susceptibles de ejecución y los que no (señalando si estaban en mora, el motivo por el que no se promovía la ejecución judicial), los que ya contaban con algún tipo de acción judicial y, finalmente, que se conciliara la información brindada con la de Deudores del Sistema Financiero, conforme al último régimen informativo presentado.</p> <p>El banco sumariado efectuó, en primer término, a través de los señores Merlo e Igarza, Presidente y Gerente General, respectivamente, en respuesta fechada el 09.03.04, ingresada a este Banco Central el 15.03.04, una serie de consideraciones generales señalando que esta Institución había reconocido la magnitud de la crisis y la necesidad de ayudar a los deudores a recomponer su situación, agregando que los problemas de incobrabilidad y la situación económica, financiera y social grave que padeció la Provincia requerían una comprensión de la situación y de la complejidad de las negociaciones, dada la importante cantidad de concursos preventivos y de casos de insolvencia que se verificaron en el período bajo análisis (fs. 55, subfs. 1/7 y fs. 250).</p> <p>A su vez, argumentó la entidad sumariada que las ejecuciones no resolvían el problema de caja y que tuvieron numerosos pedidos de espera que luego fueron traducidos en arreglos extrajudiciales; en segundo término, la presentante describió las acciones dispuestas en el contexto anteriormente referido, a saber: la designación de un responsable del área de gestión judicial, un plan de trabajo, la incorporación de datos del área de legales al sistema informático de préstamos, informes sobre deudores susceptibles de ejecución judicial haciendo saber el motivo por que no se impulsó el proceso, esquemas de supervisión, contratación de servicios profesionales externos para ejecución de deudas y la puesta en marcha de auditorías sobre el tema. Finalmente, adjuntó las resoluciones de la Gerencia General Nros. 627 y 630 en respaldo de lo señalado (fs. 250).</p> <p>El informe acusatorio da cuenta que analizada la respuesta de la entidad sumariada, el área de Supervisión de Entidades Financieras concluyó que la requisitoria no fue diligenciada de la manera solicitada, dado que la ex entidad con anterioridad al ingreso de su respuesta no efectuó mayores aportes con respecto a las indicaciones que se le habían efectuado y, mientras tanto, subsistían cuestiones pendientes de atención. En virtud de esto se le cursó una nueva nota, la N° 316/62 del 10.06.04, haciéndole saber que si bien habían designado un Responsable Administrativo de Gestión Judicial con funciones de seguimiento y control, la respuesta efectuada no incluyó una solución integral a las cuestiones abordadas, por lo que correspondía reiterarles las acciones pendientes de atención, a saber: informar a esta Institución, por mesa de entradas, los lineamientos acordados respecto a la cartera en mora, los clientes susceptibles de ejecución y los que no, los que ya contaban con algún tipo de acción judicial, conciliar los montos de deuda de dichos clientes con la información presentada respecto a los Deudores del Sistema Financiero, explicando las diferencias en</p>			

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	3
<p>caso de que no coincidiesen, aclarándole, a su vez, que la información acerca de los clientes debía ser suministrada en formato Excel. Finalmente, se indicó que la evolución respecto de este tema debía tratarse mensualmente por el Consejo de Administración y comunicarse a este Banco Central mediante la copia del Acta respectiva (fs. 56/7, fs. 60/61 y fs. 250).</p> <p>La entidad sumariada señaló, en primer término, en respuesta fechada el 30.06.04, ingresada el 07.07.04, firmada por los señores Carlos Alfredo Romano, Jorge E. Alul y José Antonio Igarza (Responsable Administración de Créditos, funcionario del Departamento de Riesgo Crediticio y Gerente General, respectivamente), que algunas de las acciones y estrategias seguidas con relación a la cartera de préstamos en mora databan de mediados del año 2003, particularmente las referidas a la reorganización funcional, a la asignación de tareas específicas para la gestión de recupero mediante acción judicial y a los esfuerzos para reordenar un esquema de información confiable y oportuno. A esto agregó que disponer la ejecución de una importante cantidad de deudores estaba condicionada y sujeta a la realidad y prioridades que determinaban las políticas de liquidez y solvencia de la ex entidad, como también a la necesidad de regenerar ingresos vía refinanciaciones de deudas que permitieran restablecer en el tiempo el devengamiento de intereses (fs. 62, subfs. 1/23 y fs. 251).</p> <p>Manifestó la entidad sumariada que con las ejecuciones se perdía el manejo y los tiempos de realización del activo, dado que la instancia judicial se encuentra sujeta a riesgos e imponderables, haciendo saber, a su vez, que la reorganización de las tareas bajo análisis partió de la existencia de una estructura que no estaba preparada para absorber la cantidad de asuntos y conflictos que se suscitaron con el rompimiento de los contratos. En segundo término, con relación a la información que le fuera requerida y a las diferencias que se plantearon, señaló que se encaró la reconstrucción de la base de datos de cuentas de deudores dados de baja del sistema de créditos que pasaron a cuentas de orden entre los años 1996 y 2000, actualizando además las gestiones de cobro extrajudiciales realizadas. Agregó que la información que disponía -que no comprendía toda la que le fuera solicitada (cuyo cumplimiento le demandaría más tiempo del previsto originalmente)- fue presentada tratando de cubrir la mayor cantidad de casos y conciliando una base de deudores al 29.02.04, para luego incorporar y tratar las novedades en forma mensual; en el Anexo obrante a fs. 62, subfs. 3/23 se acompañó copia de la información y de las novedades.</p> <p>Finalmente, hizo saber quiénes eran los abogados internos a quienes se les encargaron los casos que, a su criterio, justificaban el inicio de acciones judiciales y manifestó que, por otra parte, habían podido llegar a arreglos en casos de deudores con dificultades a pesar de que existía la posibilidad de abonar las deudas con títulos públicos (fs. 62, subfs. 1/23 y fs. 251).</p> <p>A los efectos de llevar a cabo una revisión de la información presentada por el ex banco se le requirió, mediante Nota N° 316/92 de fecha 12.08.04, una serie de cuestiones respecto a deudores extractados de las ejecuciones judiciales en trámite informadas al 31.05.04. Dichos requerimientos de información versaban acerca de los siguientes temas: fecha de la demanda, resumen del proceso judicial, fecha del último movimiento en sede judicial, descripción de la posibilidad de cobro y si el cliente se encontraba en concurso de acreedores (fs. 69/74 y fs. 251).</p> <p>En la misma fecha de la nota anteriormente aludida -12.08.04- ingresó una presentación del ex banco señalando que adjuntaba un CD que contenía la cartera total de deudores; analizada la presentación se observó que no se había efectuado una conciliación con el Estado de Situación de Deudores total, aspecto que resultaba necesario para comparar la magnitud de la cartera ejecutada con la total. A su vez, la ex entidad con fecha 16.09.04 ingresó otra presentación dando respuesta a la Nota N° 316/92/04, en la que detalló las acciones judiciales en curso y su situación procesal, e hizo saber, a su vez, que no se informaban la totalidad de los casos requeridos en la nota de este Ente Rector, cuestión que se iba a cumplimentar en sucesivas entregas. La ex entidad con</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	4
<p>relación a las acciones judiciales, que resultaban conocidas, señaló las dificultades de gestión en el contexto de la crisis y de un sistema judicial que favoreció la estrategia de la morosidad y licuación de pasivos de los deudores, particularmente, en los casos de concursos preventivos (fs. 75, subfs. 1/2, fs. 76, subfs. 1/18, fs. 161, tercer párrafo y fs. 251).</p> <p>Analizadas las presentaciones del ex banco de fechas 12.08.04 y 16.09.04 - anteriormente aludidas- el área de Supervisión de Entidades Financieras (fs. 77/98, fs. 161/62 y fs. 252) concluyó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La recopilación de información efectuada por la ex entidad no evidenció un control centralizado y, a su vez, faltaban las firmas de los responsables del armado de las planillas Excel. - La administración de la cartera morosa en litigio carecía del debido orden y seguimiento, cabiendo destacar que la cartera morosa era uno de los principales activos de la ex entidad. -Los abogados responsables de las ejecuciones no tenían un sistema homogéneo de información, toda vez que los abogados internos impactaban las novedades dentro del sistema de créditos, mientras que el resto de los abogados lo hacía a través de Memorandos. -No se brindaron detalles acerca del 52,6% de la cartera en cuentas de orden (\$ 7.905.000) y sobre el 12,68% de la cartera activa (\$ 5.737.000). -No se efectuó un seguimiento activo y/o judicial por la totalidad de la deuda de los clientes, toda vez que existían quienes estaban en situación 5 y solamente se los demandó por un porcentaje de la deuda (por ej. Codinar S.A. demandado por \$ 2.100.000 teniendo una deuda total de \$ 7.107.000, según surge de fs. 78). -No se concilió la información brindada a este Banco Central con la resultante de la correspondiente a los Deudores del Sistema Financiero a los efectos de averiguar si los clientes en mora tenían gestiones de recupero judicial o de otra clase (como fuera solicitado a través de las Notas N° 316/28/04 y N° 316/62/04) -fs.252-. <p>Lo señalado precedentemente fue comunicado al ex banco a través de la Nota 316/127 del 15.10.04 obrante a fs. 99/107. El área preinterviniente hizo saber que, con posterioridad al envío de la nota aludida, la ex entidad dejó de cumplimentar la indicación impartida por la inspección acerca de que la información fuera diligenciada a través de la mesa de entradas de este Ente Rector y, a su vez, comenzó a aportar a la veeduría información dispersa, sin firmar, en diferentes fechas y, en ciertas ocasiones, en planillas incomprensibles para efectuar el análisis requerido (fs. 162 y fs. 252).</p> <p>Al mismo tiempo agregó el área de origen de las presentes actuaciones que, en el curso de las tareas de veeduría (en fecha 14.10.05), se tomó conocimiento de la existencia de créditos hipotecarios fondeados por el Banco Hipotecario S.A., en cuyos contratos se habría establecido que en caso de que los deudores no abonaran las cuotas, el ex banco debía girar las cuotas no pagadas al banco originante de la asistencia y, a su vez, la falta de envío a ejecución generaría el aceleramiento de los pagos totales del deudor en mora, con cargo a la ex entidad. Lo señalado generó el envío, con fecha 14.10.05, de un Requerimiento de Veeduría en el que se solicitó, entre otra información, copia de los contratos de asistencias otorgadas con la intervención del Banco Hipotecario S.A. (fs. 189/93), el cual no fue respondido por la ex entidad conforme surge de fs. 163, segundo párrafo. La inspección manifestó que lo descripto anteriormente muestra desvíos con relación a lo establecido en el manual interno de la ex entidad que disponía el envío a ejecución de los deudores morosos (fs. 252).</p> <p>También se informó que durante el transcurso de la veeduría se tomó conocimiento de una serie de Memorandos cursados entre el 13.09.05 y el 11.10.05, por Gestión de Cobros, Administración de Deudas y Garantías y por el Departamento de Riesgo Crediticio al Comité Ejecutivo a la Gerencia General, a la Gerencia de Negocios y al Comité de Créditos del ex banco, manifestando la necesidad de iniciar acciones judiciales ante la proximidad de la prescripción de las</p>			

B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

mismas (Diciembre de 2005), destacándose que, por esa vía, se podrían obtener resultados positivos frente a los escasos logros obtenidos mediante otras gestiones de cobranzas (fs. 172/87 y fs. 252/53).

A su vez, luce a fs. 175/77 una reiteración de propuestas de envío a ejecución judicial, efectuadas desde las áreas remitentes a las destinatarias anteriormente mencionadas, donde se hace saber que se excluyen del pedido determinados deudores por instrucciones de la Gerencia General de fecha 03.10.05 (fs. 177, fs. 181 y fs. 253). Lo mencionado generó el envío por parte de esta Institución, con fechas 11 y 17 de octubre de 2005, de los Memorandos N° 11 y N° 13, solicitándole a la ex entidad el detalle de la cartera con atraso superior al normativo que no había sido enviada a ejecución y sus causas (fs. 169 vta./70 y fs. 253).

En respuesta, con fecha 17.10.05, el Presidente de la ex entidad señaló que el Comité Ejecutivo había resuelto con relación a la cartera en mora enviarla, sin exclusión, a ejecución judicial; sobre el particular la veeduría le indicó que elaborara el grado de avance de dicha tarea, cuestión que no fue realizada (fs. 171 y fs. 253).

De la situación y hechos descriptos precedentemente surge lo siguiente:

-A través de distintos requerimientos se investigó cuál era la política del ex banco con relación a la cartera de créditos morosa, haciéndole saber, a su vez, que no se dilatará la ejecución judicial de los deudores.

-La información aportada por la ex entidad no permitió conocer con exactitud cuál era la cartera morosa que no contaba con una estrategia de cobro, no obstante lo cual se pudo comprobar que existía cartera impaga y exigible sin un adecuado seguimiento, la cual se calculó que ascendía al 12,68% de la cartera activa -\$ 5.700.000- y al 52,6% de la cartera en cuentas de orden -\$ 7.900.000- (fs. 162, II, segundo párrafo y fs. 253).

-La ex entidad entendía que no era adecuada la estrategia de iniciar acciones judiciales a la cartera morosa, sino recurrir a otras instancias anteriores; así surgió de lo manifestado por el ex banco en su respuesta de fecha 09.03.04, ingresada a este Ente Rector el 15.03.04 (fs. 55, subfs. 1/7) y en la de fecha 30.06.04, ingresada a esta Institución el 07.07.04 (fs. 62, subfs. 1/23).

Además de las respuestas citadas la copia de una presentación judicial de un apoderado del ex banco obrante a fs. 188 también acredita lo señalado; la misma dice: *"Cabe destacar al respecto que hasta el presente ha sido política del BETCO no forzar ejecuciones de este tipo de garantías, y particularmente hipotecarias, en entendimiento de que finalmente se llegará a acuerdos con los deudores (en numerosos casos están en curso), sin perjudicar a los mismos y a la propia entidad con el pago de honorarios."* (fs. 253).

El informe acusatorio destaca que el sustento de las Resoluciones del Directorio de este Banco Central N° 207 del 25.10.05 y N° 378 del 15.12.05, a través de las cuales se dispuso la suspensión de las operaciones del ex banco por 30 días (con excepción de las correspondientes a la cobranza de créditos) y la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, respectivamente (ver fs. 199/200), se relacionó con:

-El elevado grado de afectación de la liquidez que presentaba la ex entidad producto de una importante pérdida de depósitos que la obligó a recurrir a la asistencia financiera de esta Institución.



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	6
<p>-El grado de afectación de solvencia se profundizó durante los años 2004 y 2005, período en el cual la ex entidad presentó, sin poder concretar, diversas alternativas para revertir su situación.</p>			
<p>-En materia de solvencia, al 31.08.05, la ex entidad declaró, luego de contabilizar ajustes, un patrimonio negativo de \$ 19.000.000 (fs. 253).</p>			
<p>Por lo tanto, corresponde concluir que la política del ex banco de diferir el inicio de acciones judiciales a los clientes morosos (llegando, en algunos casos, al límite de la prescripción de la acción), que se tradujo en la falta de realización de actos tendientes al recupero compulsivo (vía judicial) de créditos en mora, no resultó adecuada, deviniendo tardía la corrección de dicha política propiciada por el Comité Ejecutivo de la ex entidad con su decisión -informada el 17.10.05- de enviar la cartera en mora, sin exclusión, a ejecución judicial; todo ello a la luz de los hechos mencionados anteriormente (fs. 254).</p>			
<p>A mayor abundamiento, el informe acusatorio hace saber que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, luego de considerar los hechos bajo análisis, también concluyó que el órgano de administración de la ex entidad financiera no tuvo una política adecuada respecto de su cartera de morosos (fs. 196/203 y f 254).</p>			
<p>2 - Período infraccional: desde el 30.06.03 (fecha de estudio del que surgió que las asistencias en situación 3 o de inferior calificación representaban el 75% de las financiaciones otorgadas por la ex entidad al sector privado no financiero, y no se advirtió la puesta en marcha de gestiones efectivas tendientes al recupero de la cartera morosa) al 15.12.05 (fecha en que se dispuso la revocación de la autorización para funcionar del ex banco, sin que la misma haya instrumentado políticas y gestiones oportunas tendientes al recupero de la cartera morosa -si bien el 17.10.05 el Comité Ejecutivo había resuelto enviar la cartera en mora, sin exclusión, a ejecución judicial, dicha decisión deviene como una tardía corrección de la política del ex banco con relación a su cartera de morosos- (fs. 254).</p>			
<p>3 - Que, conforme a lo expuesto en este Considerando I, ha quedado acreditada la ocurrencia del hecho infraccional, por lo que procede realizar a continuación el análisis de los descargos y la eventual atribución de responsabilidad.</p>			
<p>II -Respecto del ex BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO.</p>			
<p>1 - Los liquidadores judiciales, Dres. Nilda Andrea Kassar y Eduardo Alfredo Ruiz, efectuaron la presentación obrante a fs. 314, subfs. 1/2 en la que hacen saber que acreditaron sus designaciones y permanencia en la función invocada (ver fs. 282//83).</p>			
<p>También exponen su interpretación de que no les corresponde asumir la representación de la entidad sumariada, de acuerdo tanto a lo dispuesto por la Resolución de Directorio N° 378 del 15.12.05 que dispuso su revocación de la autorización para funcionar como a lo resuelto mediante sentencia de fecha 11.11.05 del Juzgado Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital de la Provincia de Tucumán, en autos "Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado s/Intervención Judicial" (Expte. 2977/05) la cual expresa: <i>'las Autoridades Estatutarias del Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltda. conservan sus facultades de administración y de gobierno respecto de aquellos actos que no correspondan a la órbita de actuación de los interventores judiciales.'</i> (fs. 314, subfs. 1/2).</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	7
<p>Con relación a ello, cabe hacer notar que en autos obra el descargo deducido por el Dr. Ingaramo -apoderado de la mayoría de los sumariados- en nombre del ex banco en calidad de gestor de negocios -art. 48 del CPCCN- (fs. 316, subfs. 1/60), carácter procesal que regularizó mediante escritura pública de fecha 02.09.08 de la que surge que los señores Giacosa, Andreozzi y Ghidara, Presidente, Secretario y Tesorero del banco sumariado, respectivamente, le confirieron poder para actuar en el presente sumario (fs. 349, subfs. 1/5).</p> <p>1.1 - Que el comentado descargo refiere primero al encuadramiento de la entidad sumariada en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras mediante Resolución de Directorio N° 287 del 09.05.02 en virtud de la cual se ordenó su reestructuración y se procedió a la designación de veedores con facultad de veto, tras lo cual agrega que ese dato pone en evidencia que a través de ellos este Ente Rector tuvo pleno conocimiento, en tiempo real, in situ, de todas las operaciones que involucraban la cartera de créditos y la gestión de los que estaban en mora (fs. 316, subfs. 2).</p> <p>Añade que la falta de consideración de lo expuesto genera afectación de garantías de índole constitucional al verse vulnerados los principios de legalidad e igualdad ante la ley, conforme extensiva interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 316, subfs. 2 y vta.).</p> <p>La defensa argumenta sobre la excepcional situación de emergencia acaecida durante la 'corrida' bancaria acaecida durante los meses de noviembre y diciembre de 2001, que tuvo su punto más alto con el dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 1570 del 30.11.01; frente a todo esto argumenta que se adoptaron diversas medidas por parte del Poder Legislativo y del Ejecutivo Nacional tendientes a salvar, defender y reorganizar el contexto socioeconómico de nuestro país (fs. 316, subfs. 2vta./3).</p> <p>En otra parte de la defensa se manifiesta, en punto al quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley, que el descalce de activos y pasivos generado que ocasionó <i>"...la simultánea obligatoriedad que existe para el BETCO de acatar las órdenes judiciales y la normativa que dispuso la pesificación se provocó a dicha entidad un manifiesto perjuicio en su patrimonio ... El principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional, involucra el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se concede a otros en iguales circunstancias."</i> (fs. 316, subfs. 8).</p> <p>1.2 - Que en cuanto al análisis del sumario la defensa cuestiona la forma en que esta Institución establece que más del 75% de la cartera en mora correspondía a situaciones que calificaban entre 3 y 6, destacando que el porcentaje referido no surge de la consideración del balance del ex banco de fecha 30.06.03, aprobado por la Asamblea con fecha 22.12.03 con la presencia de un funcionario de este Ente Rector (Dr. Miguel Obeid), quien consintió y jamás lo impugnó, y de la Dra. Analía Díaz, de donde surge que las <i>"... asistencias situación 3 o de inferior calidad suman \$ 80.579.000.-, que junto con los Créditos Irrecuperables de las Cuentas de Orden (\$24.234.000), alcanzan un total de \$104.813.000.- Esta cifra, comparada con la cartera total (\$175.707.000), más los créditos Irrecuperables de las Cuentas de Orden (\$24.234.000) representan el 52,4%."</i> (fs. 316, subfs. 11 y vta.).</p> <p>Atinente a las gestiones de recupero de créditos en mora la defensa manifiesta que el Consejo de Administración estableció planes de acción implementados en distintas etapas del proceso de la crisis de deudores; sobre el particular hace particular alusión a lo resuelto en un lapso que cae fuera del período infraccional en razón de lo cual este planteo no será analizado (fs. 316, subfs. 12/14 "in fine").</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	8
<p>Inherente a la negociación de créditos en mora en el marco de la Emergencia Económica (2002-2004) y a la descripción de tareas y medidas adoptadas, la defensa refiere que <i>"... el marco de las reales posibilidades del deudor con situaciones económicas y financieras muy deterioradas hacía difícil el efectivo recupero del crédito, tanto para deudores con severas dificultades, como para aquellos que vieron restringidas sus posibilidades de asistencia financiera por falta de crédito en la economía ... También se intentó -en un momento determinado- la tercerización de ciertas actividades, entre ellas las ejecuciones judiciales, como medida para afrontar el inédito escenario por el volumen y carga administrativa adicional que representaban, y las dificultades para administrar los plazos y cantidad de cuestiones procesales que conlleva la decisión de incursión en la justicia."</i> (fs. 316, subfs. 15).</p> <p>En ese orden de ideas, la defensa formula argumentos bajo el título <i>"Negociación de créditos en mora en el marco de la Emergencia Económica (2002-2004). Descripción de tareas y medidas adoptadas"</i>; al respecto da cuenta de la creación del Departamento de Riesgo Crediticio el que propuso efficientizar la tarea en casos de arreglo de deudas que demoraban su instrumentación. Luego efectúa comentarios sobre el sistema informativo y las diversas instancias de mora que la nueva realidad económica de los deudores exigía, situación que planteaba la necesidad de adecuaciones al Sistema de Créditos el que no estaba preparado para nuevos procesos y gestión con la consiguiente dificultad para el registro minucioso de las gestiones de cobro que se llevaban a cabo (fs. 316, subfs. 14 vta./16 vta. "in fine").</p> <p>Más adelante enfatiza las adecuaciones de los manuales de procedimientos que requerían contemplar mayores plazos en las etapas previstas para los envíos a ejecución judicial y un régimen de excepciones para casos especiales; además hace hincapié en la atención de la mora temprana dado el elevado porcentaje de operaciones impagas, a las fechas de vencimientos normales (por ejemplo, tarjetas de crédito y préstamos personales), añadiendo que al momento de la suspensión de actividades (octubre de 2005) existían en marcha una cantidad importante de arreglos próximos a realizarse, en algunos casos, a la espera de hechos como el levantamiento de inhibiciones en propiedades ofrecidas en dación de pago o autorizaciones municipales para proceder a la transmisión de dominio (fs. 316, subfs. 15 vta./16).</p> <p>Finalmente se analizan tratamientos excepcionales en casos de deudores importantes con riesgo de insolvencia, lo que llevó a la adopción de estrategias particulares para proteger la recepción de bienes en defensa de créditos, tal el caso de deudores con alto riesgo de concurso preventivo donde el cómputo de plazos de períodos de sospecha afectaba parte del recupero logrado, lo que obligaba a la merituación del tiempo en cada caso y el contexto de cada negociación (fs. 316, subfs. 16).</p> <p>1.3 - Que el descargo con el título <i>"4.4. Análisis pormenorizado de los elementos obrantes en el expediente"</i> trata sobre los activos líquidos previstos normativamente además de las disponibilidades, la mayor parte de los cuales estaba indisponible por el "default" de los Títulos Públicos y los Préstamos Garantizados, expresando: <i>"...el mínimo margen de maniobra con el que se operó en el denominado 'período infraccional', con la responsabilidad de atender las obligaciones exigibles (depósitos, amparos judiciales y, luego el pago del Redescuento del BCRA). Insistimos en que los préstamos clasificados 3, 4, 5 y 6 (cartera irregular) son por definición no líquidos y no integran ningún esquema de Posición de Liquidez"</i> (fs. 316, subfs. 21 vta.).</p> <p>Por ello interpreta que el encuadre normativo en la Comunicación "A" 2879 no tiene asidero técnico y las proyecciones sobre la posición de liquidez no pueden, razonablemente, considerar la cartera de préstamos en mora como un recurso disponible para atender las obligaciones exigibles de la ex entidad (fs. 316, subfs. 22 vta.).</p>			

B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

La defensa aborda un tema bajo el título ***“Respuesta a las distintas aseveraciones que contiene dicho Informe y documentación anexa.”*** y al respecto expresa: *“Los indicadores expuestos (en Fo. 227) con distintas relaciones entre la cartera en mora sin abogados con respecto a Activos, a Patrimonio Neto, a Cartera de Préstamos y Cuentas de Orden a distintas fechas, no resultan válidos y si muy distorsionados, ya que su comparación no es homogénea. Los activos están valuados netos de provisiones por riesgo de desvalorización y/o incobrabilidad, en cambio la cartera en mora se expone en cifras brutas, lo cual invalida la comparación y sobreestima la relación e importancia de la cartera en mora.”* (fs. 316, subfs. 27 vta./28).

En torno al título ***“4.6 Consideraciones acerca de la adopción de una estrategia eficiente para posibilitar un gradual recupero de las acreencias del BETCO”***, la defensa considera que: *“En conclusión y como todo está íntimamente relacionado con el contexto, el desmoronamiento de la cartera crediticia se explica por la crisis, la crisis del BETCO se agravó dado el tiempo que insumió el rescate o el hallazgo de un mecanismo por parte del BCRA que evitara la profundización y la metástasis de la misma que devino en terminal.”* (fs. 316, subfs. 37 vta.).

1.4 - Que la defensa expresa en el acápite ***“V. CONCLUSIONES.”*** que el ex banco *“...ha sido diligente en la gestión de la cartera en mora, y que sobre el particular trabajó la mora al menos en dos reuniones semanales en el Comité de Crédito por más de cuatro horas, con asistencia del Gerente General y ex gerente de Créditos y Gestión y Mora. Se contrataron especialistas de Buenos Aires como Blas Kovacs y Luis Cervio, Juan Carlos Nougués, que asistieron a estas reuniones del comité de Crédito y asesoraron en el manejo de la cartera y en casos puntuales aconsejaron medidas.”* (fs. 316, subfs. 41/2).

También arguye que las ejecuciones judiciales no aportan liquidez a la institución bancaria acreedora ya que todo trámite judicial tiene una demora mínima de tres años (hasta obtener una sentencia de primera instancia) y de otros dos años (cuando la misma es apelada); a esto añade el *“...impacto negativo financiero en el BETCO, por el pago de tasas de justicia, bonos profesionales, adelantos para gastos y obviamente honorarios de abogados y peritos...”* (fs. 316, subfs. 42). Además destaca *“...que ‘no hubo perjuicio económico para el BCRA’, ya que la asistencia crediticia (redescuento) fue cancelada, como tampoco ‘hubo entorpecimiento de la función de fiscalización’, específicamente en lo que respecta a la situación de la cartera de morosos...”* (fs. 316, subfs. 42).

El descargo solicita se declare la prescripción pues entiende que si bien la prescripción se habría operado a fines de mayo de 2008 dado que la Resolución de apertura sumarial se dictó con fecha 14.05.08, el acto no es eficaz hasta que se lo notifica lo que significa que no produjo ningún efecto sino hasta mediados de julio de 2008 (ver fs. 316, subfs. 40 vta.).

Alude luego la defensa a la reforma constitucional de 1994 que introdujo el principio de la delegación legislativa, restricción propia que desde siempre fue rechazada en forma unánime, y la impropia (tolerada pero en condiciones restrictivas), agregando que las atribuciones que este Banco Central pretende ejercer en este caso debía ser ratificada por el Congreso de la Nación en las condiciones señaladas por la Constitución Nacional (ver fs. 316, subfs. 42 vta.).

1.5 - Que finalmente el descargo formula ***“6.1 Consideraciones preliminares acerca de las diversas gestiones llevadas a cabo con deudores del BETCO”***, rebatiendo lo expresado por la acusación con relación a que la ex entidad no contaba con una estrategia en tiempos de crisis pues la misma fue siempre privilegiar la liquidez, priorizar pagos a cuenta y/o acuerdos extrajudiciales antes que el litigio judicial (fs. 316, subfs. 43).



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	10
<p>A la expresión de que existía cartera impaga y exigible sin un merecido seguimiento, responde que el Comité de Créditos y Recuperación demuestra que el seguimiento fue permanente; al tema de que no se instrumentaron oportunas políticas ni se efectuaron oportunas gestiones tendientes al recupero de la cartera morosa, se contesta que la oportunidad tuvo que ver con la gravedad y las particulares circunstancias de la crisis de deudores que hizo imposible materializar varios arreglos (fs. 316, subfs. 43).</p> <p>En torno a la dilación en el envío a ejecución judicial de los deudores, expresa que con los cambios y adaptaciones funcionales, la reasignación de recursos y la reorganización operativa y administrativa llevada a cabo a partir del año 2003, se pudieron conseguir algunos resultados parciales que no alcanzaron a revertir la negativa situación de fondos, dada la prevalencia de los descálces patrimoniales que sufrió el ex banco (ver fs. 316, subfs. 43 vta.).</p> <p>Luego la defensa formula observaciones puntuales bajo el título “<i>Observaciones puntuales que contiene el Informe de SEFy C</i>” y al respecto menciona a dos deudores, Cruz, Héctor E. y Codinar SRL, y más adelante da a conocer casos que justificaron tratamientos diferenciados con negociaciones que se extendieron por diversas circunstancias; sobre el particular cita a Blasco S.R.L., Sollazo Hnos. S.A., Fuad Asfoura e Hijos S.A., Ganum Pablo y Roberto y Jor S.A. (fs. 316, subfs. 46 vta./46 vta.).</p> <p>2 - Que carece de eficacia exculpatoria la argüida alegación a la Resolución de Directorio N° 287 de fecha 09.05.02 que resolvió la reestructuración del ex banco, de acuerdo a los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, y la designación de veedores quienes -según asevera la defensa- sabían de la cartera crediticia en mora.</p> <p>Ello es así por cuanto el presunto conocimiento de los hechos materia de sumario que pudieran haber tenido los veedores actuantes en el ex banco, no logran enervar los incumplimientos verificados a pesar de que la defensa pretenda atribuir a esa circunstancia una significación o aptitud para mejorar su situación. El intento de desviar responsabilidad por la gestión de la veeduría de este B.C.R.A. no tiene virtualidad exculpatoria, en virtud de que el deber de controlar la marcha de los negocios sociales, en este caso particular, el regular y normal desarrollo de la actividad financiera, compete siempre a sus autoridades con prescindencia del nombramiento de veedores para actuar en la entidad financiera.</p> <p>Para entender mejor el acaecimiento de los hechos sucedidos en el seno del ex banco se deja constancia que con posterioridad a la actuación de los veedores se dispuso por Resolución N° 207 del Directorio del BCRA del 25.10.05 la suspensión de sus operaciones en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA t.o. según Ley 24144 y modificatorias (fs. 407, subfs. 188/96). Luego, por Resolución N° 345 del Directorio de este Ente Rector del 09.11.05 se resolvió la exclusión de determinados Activos y Pasivos Privilegiados a favor del Banco Macro Bansud S.A., en los términos del artículo 35 bis, apartado II, incisos a y b de la Ley de Entidades Financieras (fs. 407, subfs. 197/214).</p> <p>Posteriormente, la reestructuración del banco sumariado fue establecida mediante la Resolución N° 378 del Directorio de este Banco Central del 15.12.05 que dispuso la revocación de la autorización para funcionar al no lograr la recomposición de su situación de liquidez, encuadrándola dentro de los supuestos previstos en el artículo 44, inciso c de la Ley de Entidades Financieras y modificatorias, en atención a que se encontraba imposibilitado de continuar con la operatoria normal (fs. 407, subfs. 215/29).</p> <p>2.1- En cuanto a la afectación a los principios de legalidad e igualdad ante la ley cabe expresar lo siguiente:</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	11
<p>La inconstitucionalidad por incumplimiento al requisito de ley previa no tiene asidero, por cuanto la delegación en el B.C.R.A. del llamado poder de policía bancario o financiero, con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen, es admisible por razones de bien público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera, cuya base normativa se encuentra en la Constitución Nacional.</p> <p>La delegación legislativa se ha manifestado -en su siglo y medio largo de existencia como una necesidad permanente del buen gobierno de un Estado -hecho este que ha sido reconocido ampliamente por publicistas nacionales y extranjeros - especialmente a partir del momento en que aquél decidió abandonar su posición inicial de espectador del sistema económico y tomó como objetivo central de su existencia jugar en ese terreno un papel protagónico. El Congreso -a cuyo cargo conforme la Constitución está la regulación de la política económica y monetaria- ha delegado en una entidad técnica, el Banco Central, toda esa problemática a través del dictado de una ley, Carta orgánica en la que se fijan ciertas políticas fundamentales.</p> <p>En cuanto al principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Nacional la defensa hace alusión a la decisión del Gobierno Nacional y de esta Institución de no ser el ex banco incluido en el Decreto 1262/03 (que permitía la cancelación hasta en 120 meses), situación que le hubiera permitido aplicar la mayor parte de los Préstamos Garantizados (como se hizo con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Galicia e Hipotecario S.A), en lugar de tener que desembolsar fondos por \$ 15.556.794 que surgen de la aplicación del Decreto 739/03 (por la cancelación en 61 meses), añadiendo que en el período infraccional (junio 03/octubre 05) el impacto acumulado sobre las disponibilidades del ex banco fue superior a \$ 5.000.000 (ver fs. 316, subfs. 26).</p> <p>Sobre el particular cabe hacer notar que la igualdad es ante situaciones iguales, extremo no probado por la defensa, dado que las genéricas alegaciones referidas a los bancos aludidos impide aceptar como válidas las circunstancias alegadas de haberse ocasionado perjuicio que trasuntaría violación al principio de igualdad.</p> <p>Por otra parte, cabe especificar que la decisión de no haberse permitido aplicar hasta en 120 meses la mayor parte de los Préstamos Garantizados, es una facultad de este Ente Rector establecida en el marco de la discrecionalidad técnica que le asiste, debiendo destacarse que escapa a toda discusión la ponderación de las razones de oportunidad y mérito que informaron la adopción con los bancos mencionados por la defensa de las medidas referidas, dado el total acatamiento que este Banco Central efectúa de las normas iuspublicistas regulatorias de su funcionamiento.</p> <p>En razón de lo expuesto no se observa incumplimiento a los alegados principios de legalidad e igualdad que sirven de basamento a tal planteo.</p> <p>2.2 - Que cabe manifestar que existiendo numerosos planteos referidos a temas ajenos a los procedimientos imputados, los mismos no serán contestados en razón de su irrelevancia frente a los hechos que se reprochan; dichas argumentaciones versan sobre <u>"III. LA EXCEPCIONAL SITUACION DE EMERGENCIA"</u>, puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 (fs. 316, subfs. 4/9) y <u>"4.5.- Responsabilidades del BCRA en la génesis y desarrollo de la crisis"</u> (fs. 316, subfs. 30/34 vta.).</p> <p>También existen muchos argumentos (resumidos en los puntos precedentes del presente Considerando) que ya fueron expuestos por el banco sumariado en oportunidad de dar respuesta a las requisitorias formuladas por la veeduría actuante; esta situación también torna aconsejable omitir -a efectos de evitar reiteraciones innecesarias- las refutaciones correspondientes en atención a las</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	12
----------	--	--	----

abundantes consideraciones sobre los hechos imputados que formula el informe acusatorio, las que se expusieron en el punto 1 del Considerando I a donde se remite.

La defensa cuestiona el cálculo de la cartera morosa (75% de las financiaciones otorgadas al sector privado no financiero) por las asistencias en situación 3 o de inferior calidad, toda vez que el mismo no se obtuvo por medio del balance de fecha 30.06.03 sino que surgió de la revisión efectuada a esa fecha por los inspectores de este Ente Rector.

El argumento vertido pretendiendo desvirtuar el cálculo del porcentaje de la cartera morosa efectuado por los veedores -funcionarios nombrados por esta Institución- carece de sustento válido que permita tener al balance de fecha 30.06.03 como fuente de mayor confiabilidad, toda vez que de ser cierto que las asistencias en situación 3 o de inferior calidad más los créditos irrecuperables representaban el 52,4%, ello de ninguna manera hubiera revertido las conclusiones que dieron lugar a la formulación del cargo imputado.

Por otra parte, en base al porcentaje de morosidad de los deudores detectados fueron los veedores quienes efectuaron observaciones por intermedio de numerosos Memorandos (ver fs. 169/91), entre los que destaca el N° 8 del 19.09.03 -de fecha cercana al período cuestionado, 30.06.03 (fs. 5) mediante el cual -en dicha oportunidad- le solicitaron a la entidad sumariada información de las acciones tomadas para la cobranza de las acreencias correspondientes sin que conste objeción sobre dicho aserto por parte de la misma.

La defensa toma como cuestión definitoria para no acudir a la instancia judicial para así obtener medios de pago de los deudores morosos, a la insistente alegación de que los procesos judiciales son largos y complejos, y que tanto el concepto de liquidez como la gestión de cartera en mora no figura como uno de sus elementos.

Ahora bien, dicho argumento no se condice con lo que surge de la Comunicación "A" 2879 (Anexo I. puntos 3.2.3.3. y 3.2.4.3.) la cual dispone lo siguiente al considerar una situación de iliquidez individual o generalizada:

"En los casos de los préstamos de ambas carteras (comercial y para consumo y vivienda) a clientes clasificados en las restantes categorías (de 3 a 6), se considerará que, a su vencimiento según la situación contractual, se renuevan en su totalidad (no se registran recuperos). En consecuencia, se imputarán al último período."

Por lo tanto, si bien es obvio que la cartera en mora no es un activo líquido no existe duda de que debe ser tenida en cuenta para determinar la posición de liquidez, dado que si la misma implicara un recupero nulo en el período en el que ella es medida esto iría en detrimento de la aludida posición, y por lo tanto, redundaría en la necesidad de recurrir a fuentes de liquidez alternativas.

En virtud de lo hasta aquí expresado surge que la Comunicación 2879 no puede ser interpretada de la manera que resulte conveniente sino que debía ser escrupulosamente cumplida, habida cuenta que la actividad bancaria es esencialmente de alto riesgo y las diversas regulaciones dictadas por este Banco Central en cumplimiento de sus objetivos, tienden tanto a la protección del patrimonio de las entidades financieras como del público en general.

La Comunicación "A" 2979 establece claramente que la ex entidad debía prever los procedimientos a emplear para evaluar con suficiente anticipación las condiciones de liquidez en el contexto del mercado, con la consecuente revisión de las estimaciones y su adecuación a los nuevos



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.
<p>escenarios, adoptando recaudos para obtener recursos a costo de mercado suficientes para sustentar los activos a más largo plazo.</p> <p>Resulta entonces desacertada la afirmación en el sentido de que el concepto de liquidez definido por este Ente Rector no contempla entre sus elementos a la gestión de la cartera en mora. Al respecto cabe expresar que la Comunicación "A" 2879 establece en el punto 1.1., con relación a las políticas de liquidez que <i>"Las entidades financieras deberán adoptar políticas de dirección y control que aseguren la disponibilidad de razonables niveles de liquidez para atender eficientemente, en distintos escenarios alternativos, sus depósitos y otros compromisos de naturaleza financiera."</i></p> <p><i>Dichas políticas deberán prever los procedimientos a emplear para evaluar con suficiente anticipación las condiciones de liquidez de la entidad en el contexto del mercado, con la consecuente revisión de las estimaciones y su adecuación a los nuevos escenarios, arbitrando las medidas conducentes a la eliminación de los desfases de liquidez o adoptando recaudos para prever la obtención de recursos a costo de mercado -similar al que deben abonar sus competidores- y suficientes para sustentar prudentemente los activos a más largo plazo.</i></p> <p><i>En ese orden, deberá tenerse en cuenta el grado en que sus pasivos o activos se encuentran concentrados en determinados clientes, la situación general de la economía y del mercado y su probable evolución, su repercusión sobre la disponibilidad de líneas de crédito y la capacidad para obtener recursos mediante la venta de títulos públicos y/o cartera activa, etc."</i></p> <p>En razón de lo expuesto, para el análisis de la posición de liquidez debía disponerse, como mínimo, de los flujos de fondos consolidados de pesos y moneda extranjera que, a partir de la situación contractual, contemplen cada uno de los siguientes escenarios alternativos para afrontar situaciones específicas de liquidez, es decir la situación corriente, una situación con signos de iliquidez individual y una situación de iliquidez generalizada.</p> <p>2.3 - Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe expresar con respecto a la situación de emergencia sucedida en los últimos meses del años 2001 y el 2002 que, según se afirma en la defensa llevó a una crisis sistémica elevando los índices de pobreza en la zona de influencia del ex banco, corresponde a un período que no cae dentro del lapso infraccional por lo que resulta totalmente irrelevante a los fines de autos, no logrando enervar los incumplimientos verificados a pesar de que la defensa pretenda restarles importancia en un intento de achacar culpas a otros con el claro objetivo de convencer que su comportamiento fue adecuado a la normativa reglamentaria vigente.</p> <p>Las alusiones formuladas por la defensa en análisis con relación a las dificultades institucionales de nuestro país que podían ocasionar una crisis sistémica, no constituyen argumentos jurídicos válidos para justificar la comisión de las irregularidades, toda vez que los hechos imputados no han llegado a desestabilizar la estructura del sistema financiero, ni han constituido una suerte de imposibilidad generalizada que hubiera llevado a la comisión de similares incumplimientos a entidades del sistema financiero afectadas por tales sucesos, por lo que tal argumentación no puede válidamente ser esgrimida como elemento que haya sido una causa de la transgresión imputada.</p> <p>Es decir que lo alegado no resulta relevante ya que dicha difícil situación económica debió haber sido afrontada dentro de las normas vigentes. Ello sin olvidar que en ningún momento prueba la entidad sumariada una suerte de imposibilidad generalizada que hubiera llevado a la comisión de similares incumplimientos a otras entidades del sistema financiero afectadas por tales sucesos.</p>		

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	14
<p>2.4 - Que el descargo enfatiza la circunstancia relativa a la diligencia del Consejo de Administración en la gestión crediticia que logró una evolución positiva del porcentaje de participación de la cartera 3 a 6 y cuentas de orden, logrando un 49.3 % en su gestión al 28.02.04, destacando que ello evidencia una mejora del 3% sobre la masa total de la cartera.</p> <p>Sin embargo, este Ente Rector puso de resalto en numerosas notas remitidas al ex banco -tras los análisis de las informaciones recibidas-, las insatisfactorias respuestas obtenidas sobre la cartera en mora y las condiciones para su ejecución judicial a lo que cabe añadir que luego de la ponderación del elevado nivel de mora de la cartera crediticia, este Ente Rector concluyó que las máximas autoridades del ex banco no definieron una estrategia con la premura requerida.</p> <p>Es decir que existieron numerosas misivas remitidas al banco sumariado que merecieron las correspondientes respuestas por parte del mismo, las que según surge del Informe 316/056/06 (fs. 160/68) no cumplían íntegramente con los requerimientos formulados; aspecto analizado (aunque esto implique insistencia) con total profundidad por parte de la acusación lo cual amerita efectuar una remisión a lo expuesto en el punto 1 del Considerando I.</p> <p>Las restantes argumentaciones con relación a las medidas que pudo haber adoptado el banco, no acreditan que haya existido apego a la norma reglamentaria imputada, pues las circunstancias alegadas en la defensa por sí solas no subsanan la anomalía reprochada. Resultan de particular interés las falencias denunciadas por el abogado interno, Dr. Mario R. Goane, ante los veedores de este Banco Central y otros funcionarios del ex banco, en fecha 27.09.05, quien expresó que habría existido una gestión de cobro eficaz y eficiente de no haberse producido las irregularidades que a continuación se enumeran:</p> <p><i><u>“a. Como primera cuestión a resaltar emerge con claridad meridiana el transcurso del tiempo. Es decir un deudor que se encuentra en mora con más de CUATRO AÑOS (más de 1.500 días) sin ser derivado a ejecución judicial. Se envía recién en el quinto año de mora y por una recomendación de la veeduría.</u></i></p> <p><i><u>b. Una vez remitida la documentación e iniciado el proceso judicial, aparece nuevamente la interferencia de sectores que habiendo vencido su tiempo para gestionar su recupero fracasaron en tal misión, e inician un diálogo fluido con el deudor obstaculizando la vía judicial ordenada por resolución de Gerencia General. Aquí subyace la segunda falencia, intromisión en áreas después de haber finalizado su tarea sin éxito alguno.</u></i></p> <p><i><u>c. No obstante ser un deudor con un juicio en trámite, se propone y trata un acuerdo sin previo conocimiento del abogado interviniente en la causa. Resultando el mismo aprobado en enero del 2005.</u></i></p> <p><i><u>d. Dicho acuerdo que cumple con los recaudos formales no fija fecha de cumplimiento, con lo que el deudor se toma el tiempo que considera conveniente, obviamente ya habiendo logrado las quitas correspondientes.</u></i></p> <p><i><u>e. La gravedad de lo acontecido con Ganum no solo se limita a lo expuesto ut supra, sino que además por arte de magia aparece en poder del deudor el documento o acuerdo interno del banco con firma de funcionarios, directores y veeduría, lo que da pie a la excepción de espera interpuesta.</u></i></p> <p><i><u>f. Falta de fidelidad con la información obtenida a través de la función en la entidad, pero más preocupante resulta la familiaridad de trato con el deudor quien obtiene documentadamente lo resuelto internamente por el banco (caso similar de boeck quien presentó en el juicio un mail dando el visto por la veeduría y opuso excepción de pago y cancelación: bellusci quien presentó en el juicio estado de deuda incluso con rúbrica donde surgía la falta de registración del mutuo con garantía prendaria; Martín quien presentó en el juicio acuerdo de refinanciación suscripto por funcionarios del banco; Luque presenta factura</u></i></p>			



B.C.R.A.

 Referencia
 Exp. N° 100.398/07
 Act.

por compra de azúcares y remito de recepción de la mercadería y opone excepción de pago parcial; y varios más donde aparecen recibos expedidos a posteriori de los juicios o cobros aplicados recepcionados estando en juicio: Jiménez, Rodríguez, Neme Bchara, etc.).

g. De la lectura de las excepciones opuestas emerge también con alto grado de preocupación que se relata la supuesta existencia de una hipoteca de refinanciación ESCRITURA PUBLICA que ha desaparecido de la entidad o la escribanía (al efecto cabe citar entre otras la desaparición de los contratos de locación de LEO III – catamarca y bs. as. – que impidieron oportunamente iniciar el correspondiente desalojo, otro caso de financiación de ELIAS también opuesto bajo la denominación de novación en un expte. judicial y donde fueron citados funcionarios y el escribano actuante).

h. Asimismo de las manifestaciones vertidas se lee entre líneas que se habría pretendido interferir en beneficio de un ex director, lo cual amerita cuanto menos una investigación al respecto porque no puede obstaculizarse o condicionarse un arreglo de la ENTIDAD por cuestiones ajenas.

i. Basto intercambio epistolar sin sentido y exponiendo a la entidad a planteos dilatorios.

j. Recepción de pagos a cuenta sin el debido resguardo legal, incluso pretendió el deudor instruir al banco a que compre títulos con dichos pagos. Riesgo innecesario.

k. Por último este sin fin de errores da pie a que el deudor haga expresa reservas de accionar por vía civil o penal contra la entidad poniendo en riesgo un crédito seguro con garantía hipotecaria.” (fs. 192).

A manera de colofón se expresa: **“EN DEFINITIVA DEBE DE UNA VEZ POR TODAS ERRADICARSE ESTAS PRACTICAS REÑIDAS CON EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZAS:** demoras injustificadas, mora mayor a la establecida en el manual sin su correspondiente envío a ejecución, envío de documentos próximos a prescribir, deudores insolventados, domicilios desconocidos o empresas cerradas, interferencia cuando se encuentra en juicio, falta de aviso respectivo al profesional que interviene, cobro estando en juicio sin el debido resguardo legal, falta de confidencialidad en los actos de la entidad, documentos internos que van a parar a manos de los deudores, visto que no se cumplen o sin plazo o se cumplen parcialmente, etc.” (fs. 192/93).

2.5 - Que se encuentra ampliamente acreditado que el Consejo de Administración ante los comentados sucesos fijó una política crediticia que desatendió la norma dictada por esta Institución, no existiendo duda de que sus integrantes debían detectar y subsanar los hechos relatados que pudieron ser generadores de la irregularidad enrostrada, por lo que las alegaciones formuladas no pasan de ser una genérica invocación carente de valor exculpatorio.

Resulta también altamente ilustrativo lo que se extrae del Informe 316/473/04 el cual enfatiza (ver fs. 77/79):

“III. La entidad brindó explicaciones a través de hojas, planillas de Excel, sin que el responsable haya firmado las mismas. Dado que la recopilación de información fue de distintos sectores, no se visualizó un control centralizado de la misma ni de sus faltantes.

Se evidencia a través de estas actitudes que la administración de la cartera morosa en litigio carece del suficiente orden y seguimiento.

En la ejecución de la cartera morosa intervienen distintos abogados ya sea internos o externos. Se evidenció que solo los abogados internos informan las novedades dentro del sistema computarizado interno de Créditos. El resto de los abogados externos no utiliza elementos informáticos para anotar al banco de las novedades. Ellos lo hacen a través de Memorandos.



B.C.R.A.

 Referencia
 Exp. N° 100.398/07
 Act.

Considerando que la cartera morosa es una de los principales activos del banco, se presume que el control y seguimiento sobre ella es insuficiente, no está lo debidamente informatizado y centralizado.

Seguidamente se procederá a resumir la información suministrada

a) Cuantificación

Cartera Activa Irregular

Total de clientes en la muestra	92
Total de Deuda en \$	45.248.904
Clientes en los que se brindaron detalles	62
Deuda en la que se brindaron detalles (*)	39.511.070
% de Deuda Con Detalles (*)	87,32%
Deuda en la que no se brindaron detalles	5.737.834
Clientes en los que NO se brindaron detalles	30
% de Deuda sin Detalles	12,68%

Cartera en cuentas de Orden

Total de clientes en la muestra	74
Total de Deuda en \$	15.027.640
Clientes en los que se brindaron detalles	27
Deuda en la que se brindaron detalles (*)	7.122.957
% de Deuda con Detalles (*)	47,40%
Deuda en la que no se brindaron detalles	7.904.683
Clientes en los que NO se brindaron detalles	47
% de Deuda sin Detalles	52,60%

(*) Incluye clientes con ejecución parcial

b) Cuestiones que llamaron la atención durante la lectura de los informes de los abogados.

El cliente Albornoz José Ricardo con cuenta N° 94728 calificado en situación 4 y con una deuda registrada por \$707.941,21 y con 894 días de atraso fue demandado por \$ 339 miles.

El cliente Codinar Construcciones SRL construcciones con cuenta N° 74146 calificado en situación 5 y con una deuda registrada por \$7.106.753,29 fue demandado por sólo \$2.100 miles.

El cliente Cruz Héctor Eduardo con cuenta N°99396 calificado en situación 4 y con una deuda total de \$3.000.750,82 fue demandado sólo por \$920 miles.

El Dr. Marcotulio en el juicio contra Banco Federal Argentino S.A. y por una deuda de \$ 1,8 millones indica que el juicio está sin movimiento.

El cliente San Ramón SRL con cuenta N° 99587 con una deuda de \$270.201,72 se encontraría con un juicio paralizado según el Dr. Marcotulio.

El cliente Sucesión de Angel Lorenzo Rodríguez con cuenta N° 2181723, con una deuda de \$143.793,80 cuyos registros indican que es llevado por el Dr. Cagna, es



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	17
<p><i>informado por el Dr. Marcutulio, y en su informe indica que existe una quiebra y que el banco cuenta con garantía hipotecaria la cual no se encontraría aún ejecutada.</i></p> <p><i>La deuda con García Hermanos SRL -cliente N° 710017- por un monto contabilizado de \$132.404,90 es llevada por el Estudio Andreozzi y no podría ejecutarse en virtud a que los bienes que podrían subastarse están usurpados, habiéndose asentado villas de emergencia.</i></p> <p><i>La deuda con ABBA Tour o/Gregorio Werchow que es diligenciada por el Estudio Andreozzi por \$107.704,68 cuenta con sentencia favorable para su ejecución y sin embargo no se está ejecutando la sentencia ni existiría un acuerdo formalizado.</i></p> <p><i>El crédito efectuado al cliente N° 400084 Pani Eduardo y/o S G Pani por \$90.269,23, cuenta con la asistencia letrada del Dr. Andreozzi y honorarios a su favor aún no abonados. Según su informe existe un embargo sobre una parte indivisa y que el banco optó por no rematar.</i></p> <p><i>Asimismo el cliente S.A. Koptos con N° de CUIT 30584615091 y cuenta N° 90.672 figura en la base suministrada como Sin Abogado y al parecer es llevado por los abogados internos de la entidad.</i></p> <p><i>c) De la muestra solicitada llama la atención que una parte importante de ellos se encuentra en Concurso o Quiebra y con información de antigua data. Se elaboró un cuadro (Anexo I) que indica qué clientes de la muestra se encuentran bajo concurso o quiebra y su último movimiento con el objetivo de que la entidad ratifique, rectifique o complete la información presentada. Asimismo y en el caso de que el proceso se encuentre paralizado deberán indicar si existen medidas legales conducentes por parte del banco para impulsarlo.</i></p> <p><i>d) Asimismo se elaboró un cuadro (Anexo II) que indique sobre que clientes no se ha brindado información</i></p> <p><i>e) En virtud de que el cuadro elaborado por la entidad sobre las posibilidades de recupero no brindó la totalidad de la información solicitada dado que intervienen distintos grupos de abogados se propone indicarle que se lo informe en forma íntegra." (fs. 77/79).</i></p> <p>2.6 - Que la defensa pretende desviar la significación de los procederes achacados haciendo alusión a hechos irrelevantes a los fines de autos, cuando se extrae del informe acusatorio y de la documentación glosada a las actuaciones la serie de medidas tomadas por la veeduría radicada en la ex entidad, diligencias que se vieron corporizadas en una serie de Memorandums y Notas remitidas a las autoridades de la misma sin que conste actitud alguna que haya puesto punto final a los hechos antirreglamentarios (fs. 169/91).</p> <p>Cabe tener en cuenta el análisis efectuado (de acuerdo a una indicación surgida del Dictamen SEFy C N° 373/06, fs. 196/203) sobre la situación de los deudores morosos, tarea realizada -en base a la nota del 11.08.04 que contiene el archivo Excel facilitado en CD por la ex entidad, glosado a fs. 75, subfs. 2- que se estimó conveniente dividirla en 3 segmentos. Se destaca que también se estimó oportuno ordenar la información (brindada en CD por la ex entidad la cual obra a fs. 229) por atraso y abogado, considerándose que el elemento en común de los 3 segmentos era la fecha de constitución en mora o del último pago efectuado.</p> <p>En "... el primer segmento se expondrían aquellos casos en los cuales se carece de alguna concreta acción judicial tendiente a su cobro"; para esto se consideró información ordenada por atraso y abogado, efectuándose los siguientes comentarios:</p>			



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	18
----------	--	----

“a) Cantidad de Deudores con atraso igual o mayor a 90 días SIN ABOGADO 6.828, que totalizan un monto de deuda de \$65.055.590,10.

b) Ordenando ese archivo por la columna ‘Observaciones’, se determina la existencia de sólo 11 casos de efectiva acción de recupero:

- Clientes Sin ABOGADOS con deuda supuestamente regularizada posterior al 31/05/04: 8 deudores por \$324.007, 93
- Clientes en Concurso: 3 por \$205.559,64” (fs. 226).

“En el segundo segmento se expondrán los casos en los cuales se iniciaron las acciones pero no por el total de la deuda”, explicaciones que fueron requeridas mediante la nota 316/127/04 agregada a fs. 90 y que fueron contestadas a fs. 108, en la que se pidieron explicaciones porqué dos deudores (los más significativos, aunque pueden existir otros casos) fueron demandados por monto menor al de su deuda, observándose a fs. 226 la conclusión que seguidamente se expone:

Cifras expresadas en \$

Cliente	Deuda	Demandado	Diferencia
Codinar S.A.	7.106.753	2.100.000	5.006.753
Héctor Eduardo Cruz	3.000.751	920.000	2.080.751
TOTAL	10.107.504	3.020.000	7.087.504

El tercer segmento y “... último segmento se expondrán los casos en los cuales se iniciaron las acciones pero luego no se prosiguieron en forma debida”, destacándose que “Esta información no fue suministrada por la entidad. Para brindar una respuesta adecuada, hubiese sido necesaria la sustanciación de una auditoría legal específica (con acceso directo a los expedientes judiciales radicados en los distintos juzgados), que no se encontraba prevista dentro de las tareas específicas de la veeduría actuante.” (fs. 227).

A continuación se expone el cuadro que evidencia la relevante incidencia que tenía la cartera morosa (prestatarios con calificación de riesgo 3, 4, 5 y 6) en la situación patrimonial de la ex entidad: -Cifras en \$ miles-

	Jun-02	May-04	Setiembre 2005
Responsabilidad Patrimonial Computable	69.299	32.014	-19.241
Cartera 3	29.198	9.182	3.714
Cartera 4	41.247	24.234	3.661
Cartera 5	10.804	49.148	67.038
Cartera 6	21.682	17.808	6.083
Total Cartera Morosa (3 a 6)	102.931	100.372	80.496
Cartera Total	222.225	194.602	154.758
Activo	274.605	256.957	160.083
Cartera Sin Abogados		64.526	
Cartera 3 a 6 RPC	149%	314%	-418%
Cartera 3 a 6 / Cartera Total	46%	52%	52%
Cartera 3 a 6 + / Activos	37%	39%	50%
Cartera Sin Abogados / Cartera Total		33%	
Cartera Sin Abogados / Cartera Total + Ctas. orden		30%	
Cartera Sin Abogados / RPC		202%	

B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

El cuestionamiento formulado en el precedente punto 1.3, anteuúltimo párrafo, debe ser rebatido con la constancia surgida de fs. 227/8 que claramente expresa:

"No obstante la relevancia que denotan los indicadores precedentes, cabe referir que la mencionada cartera morosa ya se encontraba totalmente previsionada luego del sucesivo y gradual deterioro sufrido por la cartera activa a lo largo de al menos 5 años (la inspección al 31.03.01 ya exponía tal circunstancia).", agregándose que "... de todos los informes de las Inspecciones practicados a la ex-entidad desde el 31.03.01 hasta la finalización de sus actividades, no surge evidencia del otorgamiento de asistencias crediticias a prestatarios que, al momento de cada desembolso de fondos, se encontraban imposibilitados de reintegrar las deudas en las condiciones pactadas."

2.7 - Que frente a los argumentos defensivos expuestos en el punto 1.4 del presente Considerando, merece reproducirse la conclusión de los antecedentes que se expuso en el Dictamen SEFyC N° 373/06 (fs. 196/203, ver fs. 197/98):

"- La veeduría en su accionar intentó conocer cual era la política de la entidad con relación a la cartera morosa, sugiriéndole a la entidad que no se dilatará la ejecución judicial de los deudores.

- Los señores veedores, no pudieron conocer con exactitud 'cual era la cartera morosa que no contaba con una estrategia de cobro', pero sin perjuicio de ello, de los antecedentes respectivos, se pudo comprobar que existía cartera impaga y exigible sin un merecido seguimiento.

- La ex - entidad entendía que no resultaba una estrategia adecuada el inicio de acciones judiciales de los créditos en mora, sino que existían pasos intermedios hasta llegar a ese punto.

- Se hace mención asimismo a que existirían diversos apartamientos del manual interno en lo relativo al envío a ejecución de deudores morosos, citándose el caso de créditos hipotecarios otorgados por la ex entidad cooperativa fondeados en el Banco Hipotecario S.A.

- También se cita en las conclusiones, la copia de un Memorandum (v fs. 175/177) generado por 'Gestión de Cobros- Administración de Deudas y Gtías. Depto. de Riesgo Crediticio del ex - banco cooperativo, siendo los destinatarios el Comité Ejecutivo, el Comité de Créditos, la Gerencia General y la Gerencia de Negocios, y la Referencia "Reiteración de propuestas de envío a ejecución judicial'.

En el mismo se detallan cuatro columnas que son: i) N° de Cuenta; ii) Denominación; iii) Tipo de deuda y iv) Monto capital.

Finaliza el Memorandum en cuestión con una nota que reza lo siguiente: 'Por instrucciones de Gerencia General de fecha 3/10/2005 se excluyen del presente pedido los siguientes deudores', surgiendo de la columna observaciones, que se habrían excluido algunos deudores por 'Decisión de Gerencia Gral'.

También surge de un Memorandum generado por la misma dependencia - que posee los mismos destinatarios que el anterior - que se solicitaría el envío a gestión judicial, de deudas que se encontraban instrumentadas en documentos cuya prescripción resultaba inminente (60 días aprox).

A



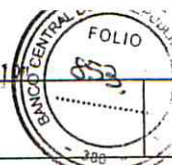
B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	20
<p>- En el último párrafo de las Conclusiones, se hace mención a que el Presidente de la entidad, con fecha 17.10.05, manifiesta que respecto de la cartera en mora, el Comité Ejecutivo había resuelto el envío de la misma sin exclusión a ejecución judicial.”.</p> <p>2.8 - Que ahora bien, con relación a los comentarios sobre la diligencia de la gestión de la cartera en mora y la consideración de que las ejecuciones no aportan liquidez a la institución bancaria, merece destacarse lo expuesto en el Dictamen SEFyC (fs. 196/203) cuando se refiere al sustento de las Resoluciones de Directorio N° 207 del 25.10.05 y N° 378 del 15.12.05.</p> <p>Dichas Resoluciones destacan los siguientes extremos: “...elevado grado de afectación de la liquidez que presenta la entidad como consecuencia de una importante pérdida de depósitos que la obligó a la entidad a recurrir a la asistencia financiera de este Banco Central”, “que el grado de afectación de la solvencia de Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltda. se profundizó durante los años 2004 y 2005, período durante el cual la entidad presentó – sin poder concretar – diversas alternativas para revertir su situación...”, “que en materia de solvencia ...al 31.08.05 la entidad declara, luego de contabilizar los ajustes ...un patrimonio negativo de \$ 19 millones ...”, etc.” (fs. 199).</p> <p>Continúa expresando el comentado dictamen: “Entonces se puede concluir que la total ausencia de actos tendientes al recupero patrimonial en algunos casos y/o los ejecutados pero no en debido tiempo y forma, ocurrieron durante una ‘desfavorable evolución de la situación económica financiera del Banco...’ - inciso 35) resolución n°378 ‘ut supra’ indicada -, circunstancia que potencia la importancia de los hechos informados por el presente, como así también las consecuentes responsabilidades.” (fs. 199/200).</p> <p>Resulta importante destacar las razones vertidas en el Dictamen bajo análisis de porqué la política de la ex entidad resultaba sin lugar a dudas perjudicial para la misma: “Se entiende que el concepto general debería ser, que al entrar el cliente en mora y haberse, eventualmente intentado el cobro de forma extrajudicial – etapa que debería representar un plazo de tiempo muy acotado -, frente al no pago del deudor debía procederse al inicio de las acciones judiciales pertinentes.</p> <p>De lo contrario, ello atenta contra el patrimonio de la entidad de que se trate, y denota una conducta indiferente en relación con el equilibrio patrimonial de la entidad que todo buen administrador debe tener como norte de su actuación.” (fs. 200), resumiendo que “...la total carencia de acciones tendientes al recupero patrimonial y/o de iniciar esas acciones en debida tiempo y forma, bien podrían ser calificada como una administración infiel en perjuicio de la entidad.” (fs. 202).</p> <p>2.9 - Que en cuanto al argumento introducido con relación a que este Banco Central no puede válidamente ejercer las atribuciones que pretende con fundamento en una delegación legislativa que caducó por no haber sido ratificada expresamente luego de la reforma constitucional de 1994, lo expresado ha sido contesado en el punto 2.1.</p> <p>Por otra parte corresponde rechazar la alegada prescripción de la acción ya que el dictado de la Resolución de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 375 del 14.05.08 que dispuso instruir el presente sumario, es sin duda un acto que tiene virtualidad interruptiva toda vez que la imputación acaeció desde el 30.06.03 hasta el 15.12.05, conforme quedó expresado en el punto 2 del Considerando I al que se remite en homenaje a la brevedad.</p> <p>3 - Prueba: Ha sido evaluada la documental acompañada (fs. 316, subfs. 55/60), como también la agregada con las defensas de ciertos sumariados que dio lugar a la formación de un expediente, que corre por cuerda separada como Anexo I, que consta de 5 cuerpos, cuyos folios</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	21
<p>corren de 1 a 1008, según se da cuenta en el auto interlocutorio del 29.10.09 y el de apertura a prueba de fecha 11.06.09 (fs. 353 y fs. 376/9, ver Considerando A, fs. 376, respectivamente).</p> <p>La informativa solicitada a fs. 316, subfs. 51 y vta., punto 6.3, referida a oficios a diligenciar a los Bancos HSBC, SANTANDER RIO, BBVA BANCO FRANCES, MACRO S.A. (activos transferidos del BETCO) y de la Nación Argentina, como también al Estudio Kassari y Asociados. ha sido proveída favorablemente (ver fs. 376/77, punto B), en razón de lo cual se agregó la documentación obrante a fs. 408, subfs. 1/3, fs. 409, subfs. 1/2, fs. 411, fs. 421, subfs. 1/8 (en dicha nota se hace constar que se acompañaron 4 Biblioratos, los cuales corren por cuerda separada), fs. 427 y fs. 445 (esta última prueba incorporada después de haberse dispuesto el cierre de prueba).</p> <p>La pericial contable pedida a fs. 316, subfs. 53/4, punto 6.6 fue sustituida por informes escritos (ver fs. 377, punto C), incorporándose el informe realizado por los consultores técnicos designados en el expediente a fs. 407, subfs. 1/305.</p> <p>También fue sustituida la prueba testimonial peticionada a fs. 316, subfs. 51 vta./3, punto 6.4 (ver fs. 377, punto C.2), obrando los testimonios de 3 de los testigos propuestos a fs. 399, subfs. 1/34, fs. 406, subfs. 1/195 y fs. 412, subfs. 1/17, teniéndose por desistidas a las declaraciones de los señores Coronel, Nougues y Vázquez.</p> <p>No se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida a fs. 316, subfs. 51, punto 6.3, cuatro primeros párrafos, como así tampoco a la pedida a fs. 316, subfs. 53, punto 6.5, en base a las fundamentaciones vertidas en el auto de apertura a prueba a fs. 377/8, puntos D. y D.2, respectivamente.</p> <p>4 - Que en consecuencia, hallándose comprobados el cargo formulado, a tenor del análisis y los fundamentos expuestos en el punto 1 del Considerando I, cabe atribuir responsabilidad al ex BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO por la irregularidad reprochada en estas actuaciones.</p> <p>III - Raúl Osvaldo SAADE (Vocal 07.04.03-30.01.04, fs. 237, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 472 y fs. 597 y Anexo I, Cuerpo 5, fs. 991 y fs. 1002) y Gaetano TRALICE (Vocal 07.04.03-26.11.03, fs. 237, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 598 y Anexo I, Cuerpo 4, fs. 700).</p> <p>1 - Que los sumariados presentaron defensas (fs. 326, subfs. 1/8 y fs. 325, subfs. 1/8, respectivamente), cuya similitud argumental torna conveniente efectuar un tratamiento conjunto sin que ello implique omitir las diferencias existentes en la situación de ambos.</p> <p>En sendos escritos impugnan la Resolución de apertura sumarial solicitando su exclusión del sumario como excepción de previo y especial pronunciamiento, por no encontrarse incluidos dentro de los sujetos que el propio informe sumarial meritúa como responsables.</p> <p>Asimismo interponen defensa de falta de acción porque nunca fueron directores ni integraron el órgano de gobierno del ex banco, arguyendo de nulidad a la Resolución de apertura sumarial por faltarle uno de sus elementos esenciales -la causa- en razón de lo cual interpretan que la misma se encuentra viciada de manera grave y manifiesta. Luego deducen excepción de falta de legitimación pasiva en razón de que la conducta imputada requiere como condición primaria el haber sido consejero durante el período en que sucedieron las supuestas irregularidades, situación que no se corresponde en el caso de ambos.</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	22
<p>1.1 - El señor Saade trata las cuestiones fácticas que fundan el planteo de nulidad y al respecto expresa que esta Institución no lo autorizó a asumir el cargo de consejero, en razón de lo cual interpreta que la imputación carece de nexo causal porque mal se le puede atribuir responsabilidad por hechos respecto de los cuales nunca estuvo autorizado para votar y tomar decisiones.</p> <p>En ese contexto se hace mención a la Comunicación "A" 2241 y al Acta N° 2026 que resume lo actuado el 07.04.03 por el Consejo de Administración del ex banco el cual efectuó mención de que el señor Saade a esa fecha no contaba aún con la autorización para cumplir funciones, añadiendo que se le permitía participar de los actos de gobierno con voz pero sin voto lo que hizo en "...las reuniones de fecha 7/08/03 y 1/08/03, dentro del período marcado como infraccional" (fs. 326, subfs. 6). A esto la defensa agrega que la declinación al cargo fue presentada el 17 de noviembre del año 2003 y aceptada el 30.01.04 por el Consejo de Administración, es decir, con anterioridad a que este Ente Rector autorizara la asunción efectiva del cargo de consejero.</p> <p>El señor Tralice reproduce los argumentos anteriores en cuanto a que fue designado consejero sin haber sido autorizado por esta Institución para actuar como tal; también pone de manifiesto que el 14.11.03 presentó la declinación al cargo la que fue aceptada el 26 de noviembre de ese año por el Consejo de Administración.</p> <p>2 - Que cabe rechazar la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida por los sumariados debido a que no corresponde efectuar un tratamiento diferenciado y anterior que al resto de las personas físicas y jurídica sumariadas; no obstante lo expuesto sí corresponde admitir el planteo de falta de acción formulado por las defensas en análisis.</p> <p>En lo inherente a la nulidad planteada es del caso señalar que la resolución impugnada no puede restringir en modo alguno los derechos o intereses de los sumariados, toda vez que aquella solamente resuelve la apertura de un proceso de investigación cuya naturaleza lejos de coartar los mismos, constituyen una instancia sumarial en la que se halla garantizado el derecho de defensa, pudiendo los involucrados tomar vista y presentar descargos.</p> <p>En autos consta que el 17.11.03 presentó el señor Saade un escrito dirigido al ex banco en el cual hizo saber sobre su declinación al nombramiento de consejero efectuado en la asamblea de socios de fecha 18.03.03, agregándose -a su vez- una nota mediante la cual la entidad financiera le comunica que el Consejo de Administración aceptó su renuncia durante la reunión celebrada el 30.01.04 -Acta N° 2043- (Anexo I, Cuerpo 5, fs. 991 y fs. 1002).</p> <p>También los dichos del señor Tralice cobran verosimilitud con la nota agregada a las actuaciones de la que se extrae que en fecha 14.11.03 presentó una nota dirigida al Consejo de Administración a fin de dar a conocer su declinación al nombramiento como consejero elegido en la asamblea de socios del 18.03.03, la cual fue tratada por dicho cuerpo societario el 26.11.03 (fs. 624 y fs. 700 del Anexo I, Cuerpo 4).</p> <p>A su vez, con posterioridad a la presentación de sus descargos los sumariados Saade y Tralice procedieron a agregar a las actuaciones el Acta N° 2025 del 27.03.03 que resume lo actuado por el Consejo de Administración, durante cuyo transcurso se resolvió prorrogar la incorporación de los consejeros electos en la asamblea de asociados del 18.03.03 hasta tanto esta Institución se expidiera sobre la autorización para que actuaran como tales. A esto añaden que la comentada asamblea es un acto en virtud del cual los asociados de la cooperativa solamente postularon sus nombramientos como directores del ex banco, pero que ello no implica que hayan formado parte del órgano de gobierno del mismo (ver fs. 463, subfs. 1/7 y fs. 464, subfs. 1/7).</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	23
<p>3 - Prueba: La documental acompañada a fs. 463, subfs. 4/7 y fs. 464, subfs. 4/7, ha sido evaluada. La testimonial peticionada a fs. 325, subfs. 6 vta./7 vta. y fs. 326, subfs. 7/8 ha sido sustituida (ver fs. 377, punto C.1) por sendas declaraciones las cuales obran a fs. 400, subfs. 1/13. No se hizo lugar a la testimonial peticionada a fs. 325, punto VI y fs. 326, punto VI (ver fs. 378, punto D.3) en razón de la argumentación allí vertida.</p> <p>4 - Que en virtud de lo expresado, no existiendo otras constancias que demuestren la actuación de los sumariados, corresponde absolver a los señores Raúl Osvaldo SAADE y Gaetano TRALICE por la imputación formulada en el presente sumario.</p> <p>IV - Humberto SANCHEZ (Vocal abril 2005-20.07.05, fs. 310, subfs. 5/11, ver subfs. 6 y fs. 313, subfs. 17).</p> <p>1 - Que en el escrito deducido (fs. 313, subfs. 1/3) interpone defensa de falta de acción; expresa que no corresponde considerarlo sujeto pasivo del presente sumario porque no contaba con la autorización de este Ente Rector para ser miembro del Consejo de Administración.</p> <p>A continuación expresa: <i>"El suscripto integraba el Consejo como miembro electo a los fines de la Ley de Cooperativas, Cap. VII, porque el Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltda. además de una entidad financiera era una Cooperativa, para la cual válidamente era vocal titular; no así a los fines de la ley de entidades financieras, y mucho menos para el Banco Central de la República Argentina, a quien mis pliegos le fueron insuficientes a la hora de aceptarme como consejero. Mal puede, so pena de caer en la incoherencia, pretender imputarme por las funciones que nunca me autorizó a ejercer y por ello, este Planteo de Falta de Acción debe ser acogido favorablemente y excluirme de esta instrucción sumarial, ya que no hay acción posible en mi contra"</i> (fs. 313, subfs. 5).</p> <p>2 - Que los dichos del inculpado en cuanto a que nunca ejerció el cargo de vocal titular constituye un extremo que encuentra sustento probatorio mediante las constancias surgidas de la reunión del Consejo de Administración del 20.12.04 (Acta N° 2064), como también de la nota de fecha 20.07.05 emitida por la Gerencia de Autorizaciones del BCRA quien comunicó sus observaciones respecto de su nombramiento como miembro de dicho cuerpo societario, por no haber declarado cargo directivo, gerencial o cargo de relevancia en entidades financieras (fs. 313, subfs. 10/16 -ver subfs. 14- y subfs. 17).</p> <p>En razón de lo expuesto y no existiendo otras constancias que demuestren la actuación del sumariado en el cargo de vocal titular, no cabe asignarle responsabilidad por los hechos materia de sumario.</p> <p>3 - Prueba: La documental acompañada (fs. 313, subfs. 10/17) ha sido convenientemente evaluada. La instrumental peticionada a fs. 313, subfs. 6, punto A.3, último párrafo, ha sido agregada por la instrucción sumarial y corre agregada a fs. 392/6. La medida probatoria ofrecida a fs. 313, subfs. 6, punto B, ha sido rechazada (ver fs. 377, punto D.1) en atención a las razones allí expuestas.</p> <p>4 - Que en virtud de lo expresado, corresponde absolver al señor Humberto SANCHEZ por la imputación formulada en el presente sumario.</p> <p>V - José Antonio GONZALEZ (Vocal abril 2005-06.05.05, fs. 310, subfs. 5/11, ver subfs. 6).</p>			



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	24
<p>1 - Que en el descargo interpuesto (fs. 310, subfs. 1/3) el sumariado aduce que nunca fue vocal titular y que como suplente renunció al cargo propuesto; aclara que se lo incorporó como consejero suplente con fecha 20.12.04 conforme consta en el Acta N° 2064 que resume lo actuado por el Consejo de Administración en fecha 20.12.04 (fs. 310, subfs. 5/11), dejando constancia que de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 3700 el nuevo director o consejero no puede asumir el cargo para el cual fue designado hasta tanto no se cumplan con las exigencias legales de aplicación.</p> <p>Luego arguye que con fecha 04.05.05 ante la renuncia de los consejeros titulares, correspondía que asumieran los suplentes para cubrir tales vacantes pero con fecha 06.05.05 elevó su renuncia al cargo, por lo que nunca llegó a asumir funciones directivas por las antedichas razones.</p> <p>2 - Que merece ponerse de relieve que el material probatorio acompañado a fs. 310, subfs. 4 se condice con los dichos del sumariado en cuanto a que nunca asumió la titularidad del cargo de consejero para el cual había sido designado en diciembre de 2004, como también que el 06.05.05 renunció al cargo de consejero (fs. 619/27, ver fs. 625 vta.); por ende, ello le apareja falta de responsabilidad cabiéndole en consecuencia decretar su absolución.</p> <p>A mayor abundamiento se deja constancia que la Gerencia de Autorizaciones del BCRA comunicó el 20.07.05 que el sumariado no declaró cargos directivos, gerenciales o puestos d relevancia en entidades financieras, situación que motivó la formulación de observaciones por parte de esta Institución para su desempeño como miembro del Consejo de Administración del ex banco (fs. 313, subfs. 17).</p> <p>3 - Prueba: La documental acompañada (fs. 310, subfs. 4/18) ha sido convenientemente evaluada.</p> <p>4 - Que en virtud de lo expresado, no existiendo otras constancias que demuestren la actuación del sumariado, corresponde absolver al señor José Antonio GONZALEZ por la imputación formulada en el presente sumario.</p> <p>VI - Carlos Héctor MERLO (Presidente 07.04.03-09.03.04, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475 y fs. 599), Elio Enzo GIACOSA (Presidente 09.03.04-15.12.05, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475), Luis Atilio RODRÍGUEZ (Vicepresidente 07.04.03-09.03.04 y 09.03.04-20.12.04, fs. 237, fs. 310, subfs 9, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475 y Anexo I, Cuerpo 5, fs. 961), César Manuel RENGEL (Tesorero 09.03.04-20.12.04 y Vicepresidente 20.12.04-15.12.05, fs. 207, fs. 237, fs. 310 subfs. 9, fs. 624, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475 y Anexo I, Cuerpo 5, fs. 961), Germán Adolfo ANDREOZZA (Secretario 09.03.04-15.12.05, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475 y Anexo I, Cuerpo 5, fs. 1000), Ernesto Hugo MASINO (Prosecretario 03.03.05-15.12.05 (fs. 207 y Anexo I del Cuerpo 3, fs. 508/9 y fs. 549/51), Mariano Vicente GHIDARA (Tesorero 20.12.04-15.12.05, fs. 207, fs. 207, fs. 310, subfs. 9 y Anexo I, Cuerpo 3, fs. 472), José Luis PRESTI (Protesorero 07.04.03-09.03.04 (Anexo I, Cuerpo 3, fs. 475 y Anexo I, Cuerpo 5, fs. 961), Víctor Hugo BONO (Vocal noviembre 2004, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 554/7), José Antonio IGARZA y Carlos Miguel Angel CENA (Gerente General y Gerente de Negocios, respectivamente en funciones todo el período infraccional, fs. 207).</p> <p>1 - Que en autos obran los descargos interpuestos por el apoderado de los nombrados (fs. 327, subfs. 1/5 y fs. 328, subfs. 1/58; fs. 323, subfs. 1/4 y fs. 324, subfs. 1/58; fs. 334, subfs. 1/4 y fs. 335, subfs. 1/58; fs. 336, subfs. 1/5 y fs. 337, subfs. 1/58; fs. 332, subfs. 1/4 y fs. 333, subfs. 1/54; fs. 320, subfs. 1/5 y fs. 322, subfs. 1/58; fs. 329, subfs. 1/4 y fs. 331, subfs. 1/58; fs. 338, subfs. 1/4 y fs. 340, subfs. 1/58; fs. 341, subfs. 1/4 y fs. 342, subfs. 1/58; fs. 315, subfs. 1/58 y fs. 317, subfs. 1/58, respectivamente), los cuales resultan idénticos al deducido por la entidad financiera.</p>			



B.C.R.A.

 Referencia
 Exp. N° 100.398/07
 Act.

1.1 - Que los sumariados Rodríguez y Merlo dedujeron para el mes de agosto del año 2008 defensas por intermedio del entonces apoderado de la mayoría de los sumariados, Dr. Ingaramo, mientras que a fs. 373/4 luce poder otorgado el 26.01.09 designando a otros profesionales como apoderados para realizar trámites ante este Ente Rector, acompañándose posteriormente una nota presentada el 20.08.10 ante este Ente Rector a los efectos de hacer saber que procedieron a comunicar al Estudio Ingaramo y Asociados que revocaron "... el poder otorgado el 14 de Agosto de 2008, mediante Escritura Pública n° 592 ... para que actúen en nuestra representación antes esa Entidad. En consecuencia quedan como nuestros apoderados ... los Señores Dres. Horacio Antonio CHEDIEK, Christian RICHTER y Jesica Mariela FRENKEL...a quienes otorgáramos poder el pasado 26 de Enero de 2.009..." (fs. 465, subfs. 1).

1.2 - Que los sumariados Merlo, Giacosa, Rodríguez, Rengel, Andreozzi, Masino, Ghidara, Presti y Bono efectúan -básicamente- planteos similares a los deducidos por los co-sumariados examinados en el Considerando III en torno a la nulidad absoluta de la Resolución de apertura sumarial, interponiendo excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de legitimación pasiva. También se hace alusión a la prescripción, aunque se aclara que ese tópico es abordado en profundidad en oportunidad de deducir otras defensas que fueron presentadas por separado.

Los sumariados plantean lo siguiente como cuestiones fácticas que fundan la nulidad y la excepción interpuesta:

La defensa del señor Merlo menciona que él asumió el cargo de consejero en diciembre de año 2004 y durante su gestión se aprobaron sin ningún tipo de objeción por parte de la asamblea de la entidad y/o el BCRA, los balances correspondientes a los ejercicios económicos cerrados con fechas 2001, 2002 y 2003. El señor Giacosa expresa que debe tenerse en consideración que asumió "...el cargo de Consejero en fecha 09.03.04 y durante su gestión se lleva adelante básicamente la implementación de la acción de cobro judicial de toda la cartera en mora y se afronta la reestructuración de la entidad." (fs. 323, subfs. 4). El descargo del señor Rodríguez manifiesta que asumió el cargo de consejero el 01.11.01 y finalizó su mandato el 20.12.04 durante cuya gestión se aprobaron los balances 2002, 2003 y 2004. El señor Rengel pone de relieve que asumió el cargo de consejero y luego su gestión fue aprobada en la Asamblea del 30.06.04, "en donde el BCRA tampoco objetó dicho acto colegial y el balance del BETCO." (fs. 336, subfs. 4). La defensa del señor Andreozzi expresa que asumió el cargo de consejero el 09.03.04 "...y durante su gestión se lleva adelante básicamente la implementación de la acción de cobro judicial de toda la cartera en mora y se afrontó la reestructuración de la entidad. Ninguna responsabilidad se le puede imputar a mi mandante por hechos anteriores, de larga e incluso consentidos por el BCRA al aceptar y aprobar los balances del BETCO durante los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004." (fs. 332, subfs. 4).

El descargo del señor Masino arguye que figura a fs. 234/9 como vocal titular desde el 01.05.02 hasta diciembre del año 2002; luego se destaca que en la nómina del Consejo de Administración obrante a fs. 207 aparece ejerciendo el cargo de Prosecretario haciéndose luego alusión a la Resolución de este Ente Rector N° 70 del 24.02.05. En razón de lo expuesto aclara que la citada Resolución estableció que no formulaba observaciones para que él se desempeñara como consejero del ex banco conforme designación de la Asamblea General Ordinaria de delegados distritales, añadiendo que "... el cargo de Prosecretario, en los hechos fue el cumplimiento de una disposición estatutaria, dado que nunca hubo oportunidad de desempeñar la secretaría. Es decir que mi representado cumplió un deber meramente formal: sin poder de decisión y menos aún intervención concreta en el proceso de toma de decisiones." (fs. 320, subfs. 4). Más adelante explica que en la información de la Central de Deudores del Sistema Financiero y de la Organización Veraz S.A. aparece como consejero suplente y luego titular, situación que motivó observaciones por parte



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	26
<p>de la Gerencia de Autorización este Ente Rector lo que dio lugar a que el 14.07.03 el ex banco contestara el requerimiento formulado sobre su situación. A renglón seguido la defensa aclara que se tuvo que iniciar un recurso de amparo informativo "Habeas Data" a raíz del cual obtuvo el 30.12.03 sentencia favorable, la que fue comunicada a esta Institución el 28.02.04; a continuación aduce que luego <i>"...transcurre el tiempo, sin otra actuación en el lapso del período que abarca el presente sumario del BCRA. En otras palabras, la designación del señor Masino como Consejero recién se produce el 03 de marzo de 2005, según Acta del H. Consejo de Administración del Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado número 2070, en la cual se toma nota de la comunicación del Banco Central de la República Argentina..."</i> (fs. 320, subfs. 5). La defensa hace alusión a que el 20.07.05 este BCRA comunicó que resolvió mediante Resolución N° 70 del 24.02.05 que no contaba con la experiencia previa en la actividad financiera.</p> <p>El descargo del señor Ghidara expresa que asumió el cargo de consejo de la ex entidad en diciembre del año 2004, <i>"...en donde prácticamente el período infraccional se encontraba transcurriendo en exceso y es precisamente durante la gestión de mi representado en donde se resuelve enviar a ejecución toda la cartera de gestión en mora."</i> (fs. 329, subfs. 4). La defensa del señor Presti arguye que <i>"asumió el cargo de Consejero con fecha 01.11.01 y finalizó su mandato 20.12.2004; durante su gestión se aprobaron los balances 2002, 2003 y 2004..."</i> (fs. 338, subfs. 4). La defensa del señor Bono argumenta que conforme surge de la documentación que acompaña no tuvo desempeño como Consejero durante el período infraccional que justifique o posibilite la imputación formulada.</p> <p>2 - Que cabe reiterar la argumentación vertida en el primer párrafo, punto 2 del Considerando III, en cuanto al rechazo del tratamiento de la excepción planteada como previa y de especial pronunciamiento por los sumariados mencionados en el primer párrafo del punto precedente, en razón de que tampoco en este caso existen circunstancias que ameriten un adelantamiento de la conclusión sumarial en su totalidad.</p> <p>2.1 - Que en otro orden de ideas, cabe expresar que consta la renuncia del señor Bono efectuada el 26.09.05 al cargo de consejero proclamado en la Asamblea de noviembre del año 2004 por lo que su situación -similar a la del señor Sánchez- en cuanto a que este Ente Rector no autorizó su nombramiento como consejero del ex banco, hecho comunicado el 20.07.05 al ex banco por la Gerencia de Autorizaciones, lo cual amerita decretar su falta de responsabilidad por la imputación formulada (Anexo I, Cuerpo 3, fs. 565/8 y fs. 554/7).</p> <p>2.2 - Que la excepción de falta de legitimación activa formulada por los señores Merlo, Giacosa, Rodríguez, Rengel, Andreozzi, Masino, Ghidara y Presti no puede prosperar por las siguientes razones:</p> <p>En primer lugar, en la reunión del Consejo de Administración del 07.04.03 (Acta N° 2026) consta que el señor Merlo fue elegido para cubrir el cargo de presidente (Anexo I, Cuerpo 5, fs. 959/67, ver fs. 961/3), puesto que desempeñó hasta el 09.03.04 en que el señor Giacosa fue designado para ocupar dicho cargo (Acta N° 2046, Anexo I, Cuerpo 3, fs. 473/77 ver fs. 475). En esta última reunión del cuerpo directivo también fueron nombrados los señores Rodríguez, Andreozzi, Rengel, Presti y Falivene para desempeñarse en la Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Protesorería y como Vocal Titular, respectivamente (Anexo I, Cuerpo 3, fs. 473/77 ver fs. 475).</p> <p>También se encuentra acreditado que la Resolución N° 77 de Directorio de este Ente Rector del 04.03.04 resolvió no formular observaciones para que los señores Giacosa, Andreozzi, Falivene y Ghidara se desempeñen como consejeros del ex banco conforme fueran elegidos por las respectivas asambleas generales ordinarias de delegados distritales, quienes -en un principio- se</p>			

B.C.R.A.

 Referencia
 Exp. N° 100.398/07
 Act.

desempeñaron los tres primeros como Presidente, Secretario y Vocal Titular, respectivamente, mientras que el último de los mencionados (señor Ghidara) consta que en la reunión del Consejo de Administración (Acta 2064) del 20.12.04 ocupó el cargo de Tesorero, cargo que hasta ese momento recayó en el señor Rengel (fs. 207 y fs. 310, subfs. 5/11, ver subfs. 9 del expediente principal y Anexo I, Cuerpo 3, fs. 473/77).

Existe documentación que confirma las expresiones del señor Masino sobre las alternativas anteriores a la aceptación por parte de esta Institución en el cargo de consejero. En efecto, en el expediente sumarial luce copia de la Resolución de Directorio N° 70 del 24.02.05 en la que consta que no se efectuaron observaciones para que aquél se desempeñe en el aludido cargo, documentación que hecha por tierra lo afirmado por la Gerencia de Autorizaciones de esta Institución en la nota del 20.07.05 obrante a fs. 313, subfs. 17, en la que informó la existencia de observaciones para su desempeño. Resulta evidentemente pues que se deslizó un error involuntario al citar al sumariado como persona observada para desempeñar el cargo de consejero para el cual había sido designado por la asamblea general ordinaria de delegados distritales (Anexo I, Cuerpo 3, fs. 501/48, ver fs. 508/9).

Cabe hacer notar que se expresa en la aludida Resolución de Directorio N° 70/05 que el señor Masino no declaró cargos directivos, gerenciales o puestos de relevancia en entidades financieras añadiendo a continuación: *"No obstante, teniendo en cuenta que, con la incorporación del nuevo consejero, los miembros titulares del consejo de administración contarán con la proporción mínima de dos tercios con experiencia previa vinculada con la actividad financiera (punto 1.1.2.2., Segundo párrafo, Sección 1., Capítulo I de la Circular CREFI – 2, texto según Comunicación "A" 4061 que resulta de aplicación), no corresponde formular observaciones para que la citada persona se desempeñe como consejero..."* (fs. 508 del Anexo I, Cuerpo 3).

3 - Que los señores Merlo, Giacosa, Rodríguez, Rengel, Andreozzi, Masino, Ghidara, y Presti formulan planteos argumentales sobre el cargo formulado similares a los ya tratados en el punto 2 del Considerando II, a donde se remite en homenaje a la brevedad.

Se indica también que ellos eran integrantes del Consejo de Administración que omitieron ejercer las facultades que les competía para controlar la política de liquidez para que se cumpliera la norma reglamentaria relativa a los procedimientos a emplear para evaluar con anticipación las condiciones de liquidez en el contexto del mercado, con la consecuente revisión de las estimaciones y su adecuación a los nuevos escenarios.

En ese sentido, no alegan ni surge de las actuaciones sumariales que hayan ejercido sus funciones cumpliendo con los deberes y obligaciones inherentes a las funciones asumidas, accionando de manera tal de promover que la ex entidad financiera desarrollara su actividad con apego a las normas de carácter público que la regían.

En lo atinente a la responsabilidad que les cabe a los sumariados por las funciones directivas y respecto de la comisión de los hechos infraccionales, procede recordar lo sentado por la jurisprudencia quien ha dicho: *"La actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de otras de carácter comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de ajustarse a las disposiciones y al contralor del Banco Central...las facultades procedimentales y sancionatorias atribuidas al Banco Central no se hallan dirigidas a individuos cualesquiera, sino a cierta clase de personas que desarrollan una actividad específica, sujetos comprendidos en el ámbito de vigencia del sistema normativo así implementado, quienes se someten a él con motivo de su libre decisión de emprender esa actividad. Las relaciones jurídicas entre el Banco Central y los sujetos sometidos a su fiscalización se desenvuelven dentro del marco del derecho administrativo, y esa situación particular es "bien diversa del vínculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado"* (dictamen de Fallos 303:1776 y Autos: Banco Mayo Coop. Ltda. v. Banco Central de la República



B.C.R.A.

Exp. N° 100.398/07
Act.

Argentina, fallo del 14/02/2008, sala II, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal).

Asimismo cabe hacer notar que teniendo en cuenta que la índole de las cuestiones bajo análisis están relacionadas con la política de liquidez, los funcionarios y directivos designados responsables del manejo de la política de liquidez en el ex banco fueron los integrantes del Comité Ejecutivo, señores Giacosa (presidente), Rodríguez (vicepresidente), Andreozzi (secretario), Rengel (tesorero) y Ghidara (secretario), por lo que sus respectivas responsabilidades se verán agravadas.

En lo inherente a al Gerente General Igarza se pondera que si bien se encontraba en relación de dependencia tuvo una participación que implicó desconocimiento de instrucciones, conforme surge de las reuniones del Consejo de Administración del 09.03.04 y 20.12.04 (Actas N° 2046 -Anexo I, Cuerpo 3, fs. 473/77, ver fs. 476 y fs. 221/2- y N° 2064 -fs. 310, subfs. 10-),

3.1 - Que surge de la nota dirigida a los veedores de este Banco Central, suscripta por el presidente Giacosa y fechada el 17.10.05, que el Consejo de Administración en fecha 12/08/05 (según consta en Acta N° 2083) tomó conocimiento del memorando N° 11 expresándose que "... respecto de la cartera en mora este Consejo ha resuelto el envío de toda la cartera sin exclusión alguna a ejecución judicial, habiendo encomendado a Gerencia General la preparación de todas las carpetas para hacer entrega a los letrados seleccionados." (fs. 171).

De esto se extrae que la decisión tomada por el Consejo de Administración de enviar la cartera en mora (sin exclusión alguna) a ejecución judicial, fue una decisión tomada presumiblemente por el órgano de administración en la reunión de fecha 12.08.05 por lo que cabe interrogarse porqué la decisión adoptada en el mes de agosto del año 2005 fue puesta en conocimiento de la veeduría recién el 17.10.05, 10 días antes de disponerse la suspensión de las operaciones.

Aparece indiscutible que la decisión de remitir la cartera a ejecución resulta a todas luces intempestiva, dado que los fundamentos vertidos con anterioridad eran contrarios a la efectivamente adoptada en agosto del año 2005, debiendo tenerse presente que en consecuencia que el Gerente General -señor Igarza- (sobre cuya participación se expone en punto siguiente del presente Considerando) no obró en consonancia con la instrucción impartida por el órgano de gobierno, pues algunas deudas en mora fueron excluidas de ser enviadas a ejecución judicial (fs. 171 y fs. 181). Esta circunstancia será tenida en cuenta para agravar su situación.

4 - Que teniendo en cuenta que los señores Igarza y Cena se desempeñaron como Gerente General y Gerente de Negocios, respectivamente, resulta apropiado recordar lo que ha dicho la jurisprudencia respecto de estos funcionarios: "*Que aun cuando, como en el caso, medie una relación de dependencia entre el apelante y el banco sumariado, la actuación que les cabe a los gerentes asume una importancia y características singulares, pues en dichos funcionarios se delegan funciones ejecutivas de la administración y es entonces que la ley les adjudica, -justamente por la importancia de esas funciones, que en muchos casos pone en sus manos el destino de la sociedad- las mismas responsabilidades que incumben a los directores en virtud de ley no excluyendo, por ello, la responsabilidad de estos últimos*" (Autos: García Sanz, Roberto O. y otro v. Banco Central de la República Argentina, fallo del 12.06.2006, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V).

Por todo lo expuesto surge que de la actuación de los señores Igarza y Cena en la ex entidad financiera en la comisión del cargo formulado, son responsables por los hechos tipificados bajo el cargo imputado, cabiéndoles responsabilidad por la imputación de autos sin dejar de considerar el distinto puesto funcional que los unía con la ex entidad.



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	29
<p>5 - Que los señores Ghidara, Igarza, Cena, Andreozzi, Masino y Rengel, efectuaron las presentaciones que obran a fs. 472/566 y fs. 568/98; en sendas notas solicitan que en la oportunidad previa a resolver este caso se dicten medidas para mejor proveer y “...se tengan en cuenta las conclusiones a las que en esta presentación arribamos en defensa de nuestra gestión de la institución bancaria acorde a ley” (fs. 473), como también denuncian la existencia de nuevas normativas, acompañan documentación relativa a la situación en materia de liquidez y solvencia del ex banco durante los períodos mayo-02/marzo-03 (ver fs. 576/98) y denuncian el procesamiento de jueces en diferentes causas por irregularidades en los amparos y medidas cautelares tramitadas en los juzgados federales N° 1 y 2 de Tucumán.</p> <p>Situación de similar característica sucede con sendas notas presentadas por los señores Merlo y Presti e Igarza obrantes a fs. 599/614 y fs. 630/722, respectivamente, en las que se adjuntan datos sobre temas varios (requisitos mínimos de liquidez, detalle de Actas del Comité de Créditos y del Consejo de Administración, arreglos con deudores morosos y diligencias y gestiones de cobro efectuadas con deudores en mora, entre otros).</p> <p>5.1 - Que sobre el particular cabe expresar que las presentaciones deducidas por los sumariados mencionados en el punto precedente para plantear cuestiones que no fueron propuestas en la oportunidad de presentar defensa, no resultan admisibles en tanto ello constituye un extemporáneo intento de alterar los extremos que determinan la traba de la litis sumarial.</p> <p>Por otra parte, existe un triple orden de razones para rechazar el planteo interpuesto por los sumariados; en primer lugar una gran proporción de los hechos nuevos formulados, no caen dentro del período investigado y resultan, además, ajenos a la cuestión sometida a sumario. Es decir que el planteo introducido en la oportunidad de cerrar el período probatorio, excede el objeto del proceso sumarial en tanto que el mismo quedó definitivamente delimitado cuando se presentaron las defensas luego del dictado de la resolución de apertura sumarial.</p> <p>6 - Prueba: Idénticas consideraciones a las expuestas en el punto 3 del Considerando II cabe efectuar respecto al ofrecimiento probatorio formulado por los sumariados aquí tratados, en razón de ser éste de similar tenor.</p> <p>7 - Que en virtud de lo expresado, existiendo constancias que demuestran omisión de las obligaciones a su cargo, corresponde responsabilizar a los señores Carlos Héctor MERLO, Elio Enzo GIACOSA, Luis Atilio RODRÍGUEZ, César Manuel RENGEL, Germán Adolfo ANDREOZZI, Ernesto Hugo MASINO, Mariano Vicente GHIDARA, José Luis PRESTI, José Antonio IGARZA y Carlos Miguel Angel CENA por la imputación formulada en el presente sumario. Se tendrá en cuenta la circunstancia agravante mencionada en los puntos 3 (último párrafo) y 3.1 de este Considerando. Al señor Víctor Hugo BONO le cabe absolución por las razones invocadas en el punto 2.1 del presente Considerando.</p> <p>VII - Carlos José FALIVENE (Protesorero 09.03.04-31.05.05, fs. 207, fs. 625 vta. y Anexo I, Cuerpo 3, fs. 472 y fs. 475).</p> <p>Que en autos obran los descargos interpuestos por el apoderado del nombrado (fs. 318, subfs. 1/58 y fs. 319, subfs. 1/4).</p> <p>Que no obstante ello, atento a que se ha acreditado en las actuaciones sumariales el fallecimiento del nombrado, (fs. 826/827), corresponde tener por extinguida la acción sumarial a su respecto (Código Penal, artículo 59, inciso 1°).</p>			



B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

30

VIII - CONCLUSIONES.

1 - Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21526.

Es pertinente destacar que para la determinación del monto de las multas correspondientes se ha ponderado:

1.1 - Que respecto del cargo imputado se ponderó la política del ex banco de diferir el inicio de acciones judiciales a los clientes morosos, algunos de los cuales llegaban al límite de la prescripción de la acción, en razón de la falta de actos tendientes a recuperar por vía judicial los créditos en mora, deviniendo tardía e inadecuada la corrección de dicha política propiciada por el Comité Ejecutivo de la ex entidad, quien recién el 17.10.02 (casi dos meses antes a que se produjera la revocación de la autorización para funcionar) decidió enviar la cartera en mora, sin exclusión, a ejecución judicial, lo cual implicó la existencia de una inadecuada política de liquidez.

En materia de solvencia, al 31.08.05, la ex entidad declaró luego de contabilizar ajustes un patrimonio negativo de \$ 19.000.000 (fs. 253).

2 - Que en el Considerando II ha sido tratada la responsabilidad de la entidad sumariada y en los Acápites III a VI se ha ponderado la de las personas físicas involucradas agravando la situación de quienes se desempeñaron dentro del Comité Ejecutivo, luego se tuvo en cuenta la función desempeñada de los restantes miembros del Consejo de Administración, el diverso grado de ingerencia y en su caso la relación de dependencia de los mismos.

3 - Por ello considerando las penalidades en función de las características de las infracciones las circunstancias y formas de participación en los ilícitos y los antecedentes de los sumariados, es pertinente que se aplique la sanción prevista en el inciso 3) del artículo 41 de la Ley N° 21526.

4 - Que la Gerencia Principal de Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.

5 - Que de acuerdo con las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, art. 47, inciso d) -texto según Ley N° 26739-, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias se encuentra facultado para signar el presente acto.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS**RESUELVE:**

1- No hacer lugar a la excepción previa formulada por los sumariados SAADE, TRALICE y BONO analizados en los Considerandos III (punto 2, primer párrafo) y VI (punto 2), respectivamente.

2- Rechazar la prueba mencionada a fs. 377/8, puntos D, D.1, D.2 y D.3, en atención a las argumentaciones allí vertidas a las que se remite.

3- Rechazar los planteos de prescripción formulados por el BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOPERATIVO LIMITADO, y por los señores José Antonio IGARZA, Elio Enzo GIACOSA, César Manuel RENGEL, Germán Adolfo ANDREOZZI, Luis Atilio RODRÍGUEZ, Carlos Miguel Angel CENA, Mariano Vicente GHIDARA, Carlos Héctor MERLO, José Luis PRESTI y Ernesto Hugo MASINO, en atención a los fundamentos expresados en el Considerando II, punto 2.9.



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.398/07 Act.	31
<p>4- Absolver a los señores Raúl Osvaldo SAADE (D.N.I. 12.622.784), Gaetano TRALICE (D.N.I. 12.675.673), Humberto SANCHEZ (D.N.I. 7.046.993), José Antonio GONZALEZ (D.N.I. 10.013.173) y Víctor Hugo BONO (D.N.I. 10.402.242).</p> <p>5- Declarar Extinguida la acción sumarial respecto del Señor Carlos José FALIVENE (L.E. 8.097.729) en virtud de haberse acreditado su fallecimiento, conforme surge del Considerando VII.</p> <p>6- Imponer las siguientes sanciones de multa en los términos del inciso 3) del artículo 41 de la Ley N° 21526:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al ex BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOPERATIVO LIMITADO (CUIT N° 30-50001589-2): multa de \$ 280.000 (pesos doscientos ochenta mil). - Al señor José Antonio IGARZA (D.N.I. 10.220.995): multa de \$ 280.000 (pesos doscientos ochenta mil). - A cada uno de los señores Elio Enzo GIACOSA (L.E. 7.017.343), César Manuel RENGEL (L.E. 7.085.924) y Germán Adolfo ANDREOZZI (D.N.I. 13.278.935): multa de \$ 218.700 (pesos doscientos dieciocho mil setecientos). - Al señor Luis Atilio RODRÍGUEZ (D.N.I. 8.089.700): multa de \$ 181.700 (pesos ciento ochenta y un mil setecientos). - Al señor Carlos Miguel Angel CENA (D.N.I. 7.083.331): multa de \$ 168.000 (pesos ciento sesenta y ocho mil). - Al señor Mariano Vicente GHIDARA (D.N.I. 11.475.372): multa de \$ 123.200 (pesos ciento veintitrés mil doscientos). - Al señor Ernesto Hugo MASINO (L.E. 7.080.547): multa de \$ 86.800 (pesos ochenta y seis mil ochocientos). - A cada uno de los señores Carlos Héctor MERLO (D.N.I. 7.071.490) y José Luis PRESTI (D.N.I. 13.475.561): multa de \$ 78.400 (pesos setenta y ocho mil cuatrocientos). <p>7- El importe de las multas mencionadas deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas-Multas- Ley de Entidades Financieras-Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento del devengamiento de los intereses respectivos a partir de esa fecha y perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal que prescribe el artículo 42 de la Ley 21.526.</p> <p>8- Notifíquese con los recaudos que establece la Comunicación "B" 10451 (antes Comunicación "B" 9239), en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar - en su caso - los sujetos sancionados con la penalidad prevista por el inc 3° del artículo 41 de la Ley N° 21.526 y modificatorias.</p>			



B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 100.398/07
Act.

9- Hágase saber a los sumariados con sanción de multa que ésta únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en los términos del artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras.


SANTIAGO CARNERO
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

falt

~~TOMADO~~ NOTA PARA DAR CUENTA AL DIRECTORIO

Secretaría del Directorio

70 SEP 2013



VIVIANA FOGLIA
PROSECRETARIO DEL DIRECTORIO